

## EL RECONOCIMIENTO DEL LAUDO ANULADO: UNA RETROSPECTIVA

B. Cremades / A. Tejada <sup>1</sup>

El reconocimiento del laudo anulado suele presentarse como un lugar crítico, una de las cuestiones más problemáticas y emblemáticas -se ha dicho- del arbitraje comercial internacional. Los problemas que suscita son perfectamente conocidos y es lugar común la afirmación de que el reconocimiento del laudo anulado es contrario al Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva York el 10 de junio de 1958 (330 United Nations Treaty Series 3)<sup>2</sup>, y a la armonización y convergencia de soluciones perseguida por ese Convenio. La preocupación por el reconocimiento del laudo anulado es bien anterior al asunto *Norsolor* en que por primera vez se manifestó la cuestión a nivel judicial: estuvo presente ya en la génesis misma del Convenio europeo sobre arbitraje comercial internacional, hecho en Ginebra el 21 de abril de 1961 (484 United Nations Treaty Series 349) que, como es sabido, limitó los motivos de anulación del laudo en orden a la relevancia o inconsecuencia de la anulación sobre su reconocimiento. No vamos aquí a defender o combatir los criterios de la doctrina científica sobre reconocimiento del laudo anulado, doctrina que es bien conocida no solo porque esa doctrina es abundantísima sino también porque sobre este asunto se han pronunciado, como sobre casi ningún otro, los más autorizados especialistas. Además, los criterios expresados por la doctrina han merecido particular atención por cuanto presentan posiciones encontradas y pareceres tan distintos que no se dan en ninguna otra de las muchas cuestiones que suscita el arbitraje internacional, un vivo debate doctrinal que es expresión de lo que han venido a calificarse como concepciones filosóficas distintas del arbitraje internacional, lo cual es efectivamente cierto. Con propósito de menor alcance, nos limitaremos aquí a recordar las razones expresadas por los tribunales judiciales que han reconocido laudos anulados, dejando hablar por sí solas a esas decisiones judiciales, sin comentario, interpretación o juicio de nuestra parte<sup>3</sup>: con excesiva frecuencia esas palabras, las palabras fundamentales con las que se ha razonado judicialmente el reconocimiento del laudo anulado, han sido relegadas al olvido o distorsionadas a fuerza de ser interpretadas y reinterpretadas para encontrar apoyo o fundamento

<sup>1</sup> Abogados, B. Cremades y Asociados, Madrid <https://www.cremades.com/es/>

<sup>2</sup> La plataforma online [www.newyorkconvention1958.org](http://www.newyorkconvention1958.org), desarrollada a partir de la Guía UNCITRAL sobre el Convenio de Nueva York, contiene información sobre 3.000 decisiones judiciales de 64 jurisdicciones estatales de los actualmente 161 Estados miembros del Convenio.

La plataforma CLOUT (Case Law on UNCITRAL texts) <https://uncitral.un.org/> . propiciada también por las Naciones Unidas, contiene asimismo abundante información sobre el Convenio de Nueva York y documentos que no pueden encontrarse en [www.newyorkconvention1958.org](http://www.newyorkconvention1958.org). La plataforma [www.newyorkconvention1958.org](http://www.newyorkconvention1958.org) recoge las decisiones judiciales sobre el Convenio de Nueva York recopiladas desde 1976 en ICCA Yearbook Commercial Arbitration, además de los 'travaux préparatoires', sus seis textos auténticos y 20 traducciones no oficiales a diferentes idiomas. El Yearbook está disponible en [www.kluwerarbitration.com](http://www.kluwerarbitration.com) . Complemento de ese esfuerzo es la ICCA Guide to the interpretation of the 1958 New York Convention, disponible en 23 idiomas en [https://www.arbitration-icca.org/publications/NYC\\_Guide.html](https://www.arbitration-icca.org/publications/NYC_Guide.html)

<sup>3</sup> En las transcripciones hemos omitido notas, citas, referencias, cursivas, énfasis y en ocasiones hemos alterado el orden expositivo original, todo en beneficio de presentar, del modo más claro posible, el razonamiento esencial mínimo de cada resolución. Las traducciones son nuestras salvo que otra cosa se advierta. El lector debe entenderse remitido siempre al texto original de la decisión judicial de que se trate, que en cada caso se indica.

de posiciones doctrinales preconcebidas. Recordar, brevemente siquiera, los términos judiciales fundamentales sobre los que se ha construido el camino, que llega hasta hoy, del reconocimiento del laudo anulado, es el sencillo propósito de estas líneas; y con esas palabras recordadas, y la perspectiva que da el tiempo, presentar unas breves consideraciones finales. Se ha juzgado oportuno hacer referencia también, junto a las principales decisiones judiciales de reconocimiento del laudo anulado, a otras que no resultan en ese reconocimiento pero contribuyen al mejor entendimiento de aquéllas.

#### Clair (1980)

Como se ha dicho, la cuestión se manifestó en toda su dimensión por vez primera a nivel judicial en relación con el asunto Norsolor. Antes de eso, a pesar de que el Convenio de Ginebra admitía expresamente el reconocimiento del laudo anulado, parecía entenderse indubitadamente que el Convenio de Nueva York obligaba a denegar el reconocimiento. Y así, un laudo CCI dictado en Ginebra (Suiza) el 20 de julio de 1978, reconocido en Francia por decisión de 3 de octubre de 1978 del Presidente del Tribunal de Grande Instance de París (que desestimó además el recurso contra el reconocimiento mediante otra decisión de 23 de julio de 1979), fue posteriormente anulado por decisión de 31 de octubre de 1979 de la Cour de Justice de Ginebra; en consecuencia, las dos decisiones del Presidente del Tribunal de Grande Instance de Paris fueron revocadas por decisión de 20 de junio de 1980 de la Cour d'Appel de Paris (Chambre 1, Section Supplémentaire, *Claude Clair v. Louis Berardi et Garnier et Pavec*, es qual, affaire 11542, Revue de l'arbitrage 1981, 424) "considérant qu'aux termes de la Convention de New York du 19 juin 1958 (art. 5 e), à laquelle ont adhéré la France et la Suisse, la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale doit être refusée lorsque la preuve est fournie que la sentence a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue [...] l'annulation par la Cour de Justice du Canton de Genève de la sentence en date de 20 juillet 1978 rend cette décision insusceptible d'exequatur."

#### Norsolor (1984)

El reconocimiento del laudo anulado se volvió a presentar poco después, cuando Francia había adoptado en su 'nouveau Code de procedure civile' un nuevo régimen del arbitraje internacional (Decreto de 12 de mayo de 1981), en el conocido asunto Norsolor; una batalla judicial que se inicia a partir de un laudo dictado en Austria el 26 de octubre de 1979 que fue reconocido en Francia por decisiones del Presidente del Tribunal de Grande Instance de París de 5 de febrero de 1980 y 4 de marzo de 1981. En Austria se promovió la anulación del laudo, desestimada por decisión del Handelsgericht de Viena de 29 de junio de 1981, que fue apelada. El reconocimiento del laudo en Francia fue asimismo apelado y la Cour d'Appel (decisión de 15 de diciembre de 1981) aplazó su decisión hasta que los tribunales austriacos resolvieran la apelación sobre la anulación del laudo, anulación que fue declarada por el Oberlandesgericht de Viena (decisión de 29 de junio de 1982), que fue también recurrida. Pendiente ese recurso, la Cour d'Appel de Paris, en vista de la

anulación del laudo, denegó el reconocimiento por aplicación del artículo V(1)(3) del Convenio de Nueva York (decisión de 19 de noviembre de 1982, *Norsolor, S.A. (France) v. Palback Ticaret Limited Sirketi (Turquie)*, *Revue de l'Arbitrage* 1983, note B. Goldman). Los tribunales austriacos terminaron finalmente por declarar la validez del laudo (decisión del Oberster Gerichtshof -Tribunal Supremo de Austria- de 18 de noviembre de 1982) y el Tribunal de Grande Instance de París dispuso su reconocimiento (decisión de 20 de junio de 1983).

Lo que importa aquí es que la Cour de Cassation, que había sido llamada a juzgar sobre la denegación de reconocimiento del laudo por la Cour d' Appel, estableció lo siguiente: "Vue, ensemble, l'article 7 de la convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences étrangères, signé à New-York le 10 juin 1958 et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; attendu que, d'après le premier de ces textes, les dispositions de la convention ne privent aucune partie intéressée du droit qu'elle pourrait avoir de se prévaloir d'une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admise par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée; qu'il en résulte que le juge ne peut refuser l'exequatur lorsque son droit national l'autorise et que, en vertu du second il doit donc, même d'office, se livrer à cette recherche". Y comoquiera que la Cour d'Appel había denegado el reconocimiento por aplicación del artículo V(1)(3) del Convenio de Nueva York, la Cour de Cassation resolvió que "en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher, même d'office, si le droit français ne permettait pas à la société Palbak de se prévaloir de la sentence invoquée, la Cour d'Appel a violé les textes souvisés", por lo que casó y anuló la sentencia (decisión de 9 de octubre de 1984, 1re Chambre Civile, arrêt n° 730, pouvoi n° 83-11.355, *Palback Ticaret Limited Sirketi v. Norsolor, S.A.*, *Bulletin* 1984 I N° 248).

#### American Machinery (1987)

La cuestión volvió a suscitarse en relación con un laudo CCI dictado el 24 de mayo de 1982 en Ginebra cuando se argumentó, en contra de su reconocimiento en los Estados Unidos, que el laudo había sido anulado por los tribunales de Pakistán en ejercicio de competencias jurisdiccionales ciertamente exorbitantes. El US District Court for the Southern District de Nueva York reconoció el laudo considerando que "pursuant to the [New York] Convention, a federal court shall confirm the award unless it finds one of the grounds for refusal or deferral of recognition or enforcement of the award specified in the said Convention [...] [R]espondent claims that the award has been set aside by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made. [...] This provision does not assist the Respondent. The law under which this award was made was swiss law because the award was rendered in Geneva pursuant to Geneva procedural law" (decisión de 23 de marzo de 1987, *American Construction Machinery & Equipment Corporation Ltd. (Caiman Islands) v. Mechanised Construction of Pakistan Ltd. (Pakistan)*, 659 F. Supp. 426 (S.D.N.Y.) [1987]), decisión que fue confirmada en apelación (decisión de 14 de septiembre de 1987 de la US Court of Appeals Second Circuit, 828 F.2d 117 [2d Cir. 1987]).

Sonatrach (1988)

Muy poco después fue reconocido en Bélgica un laudo dictado en Argel invalidado ("*infirmé*") por la Cour d'Appel de Argel, cuya decisión (de noviembre de 1986) fue recurrida ante el Tribunal Supremo de Argelia. El laudo provisionalmente anulado fue reconocido por el Tribunal de Première Instance de Bruselas confirmando una decisión anterior de 23 de julio de 1987 del Presidente de ese mismo Tribunal. El Tribunal consideró que no eran aplicables al caso ni el Convenio de Nueva York ni el Convenio de Ginebra y que, conforme a su derecho interno, la anulación provisional del laudo no era causa de denegación del reconocimiento: "le Tribunal ne peut pas plus conclure à la prétendue 'inexistence' de la sentence litigieuse que découlerait de la décision de cette éminente juridiction saisie d'un recours ordinaire par appel et statuant au fond en "infirmant" la sentence [...] [D]ans le cadre de cet arbitrage international s'il y a eu référence au droit algérien en ce qui concerne le fond, les parties par l'art. G de la Mission d'Arbitrage se sont référées au Règlement de la Chambre de Commerce Internationale contenant l'art. 24 souvisé (renonciation à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent renoncer) [...]; la loi algérienne telle que produite prévoit en son art. 446 du Code de Procédure Civile que 'dans la procédure et sauf conventions contraires des parties, celles-ci et les arbitres se conforment aux délais et formes établis par les juridictions. Les parties peuvent renoncer à l'appel lors et après la désignation des arbitres", ce qui -aux yeux du Tribunal et dans le cadre national de son contrôle d'une convention d'arbitrage international- est le cas [...]; aucun document n'est produit permettant de savoir si -d'après la loi du pays où cette décision a été prononcée- l'arrêt susvisé est passé en force de chose jugée (art. 570, 4° du Code Judiciaire belge) alors qu'il y a pourvoi en cassation toujours pendant en Algérie; il n'est dès lors pas possible au Tribunal, dans l'état actuel des choses, de reconnaître autorité de chose jugée à la décision en cause" (decisión de 6 de diciembre de 1988, *Société Nationale pour la Recherche, le Transport et la Commercialisation des Hydrocarbures, Sonatrach (Algérie) v. Ford, Bacon & Davis Inc (Dallas/US)*, nº 467, Chambre 12, R.G. 45.818, Repert. Nº 32571).

Recurrida esa decisión y a pesar de seguir pendiente el recurso ante el Tribunal Supremo de Argelia, la Cour d'Appel de Bruselas ordenó la ejecución del laudo considerando "que Ford, Bacon et Davis n'a pas immédiatement fait pratiquer une saisie-arrêt exécution dès la prononciation de l'ordonnance du président du tribunal de première instance de Bruxelles exequaturant la sentence arbitrale, alors qu'elle aurait pu le faire; [q]ue l'on ne peut cependant lui reprocher ce réflexe de prudence dès lors qu'elle pouvait s'attendre à l'introduction d'un recours contre l'ordonnance précitée; [...] que Ford, Bacon et Davis subit incontestablement un préjudice dès lors qu'elle est privée des sommes qui lui ont été allouées par une sentence arbitrale paraissant 'de prima facie' définitive [...] qu'il convient d'observer que la sentence arbitrale a été prononcée à Alger le 29 décembre 1985 et que les parties s'étaient engagées en regard du règlement de procédure de la chambre de commerce internationale d'exécuter immédiatement cette sentence; [...] que l'art. 14.01 du code judiciaire permet à la partie qui a obtenu une condamnation de

requérir du juge d'appel l'exécution provisoire du jugement entrepris, avant même que ne soit abordé le fond du litige [...]" (decisión de 9 de enero de 1990, Huitième Chambre, R.G. n° 726/89),

Bridas (1990)

No tiene nada de extraña la declaración judicial de incompetencia para conocer de la anulación de un laudo extranjero, es decir, dictado en país distinto al del juez de anulación. Así, por ejemplo, el US District Court for the Southern District de Nueva York se declaró incompetente para juzgar sobre la anulación de un laudo CCI dictado en México el 20 de diciembre de 1989, considerando que "the 'competent authority' as mentioned in article V(1) (e) for entertaining the action of setting aside the award is virtually always the court of the country in which the award was made. The phrase 'or under the law of which' the award was made refers to the theoretical case that on the basis of an agreement of the parties the award is governed by an arbitration law which is different from the arbitration law of the country in which the award was made. [...]" [W]e hold that the contested language in article VI(e) of the Convention, "...the competent authority of the country under the law of which, [the] award was made", refers exclusively to procedural and not substantive law, and more precisely, to the regimen or scheme of arbitral procedural law under which the arbitration was conducted, and not the substantive law of contract which was applied in the case. In this case, the parties subjected themselves to the procedural law of Mexico. Hence, since the situs, or forum of the arbitration is Mexico, and the governing procedural law is that of Mexico, only the courts of Mexico have jurisdiction under the Convention to vacate the award" (decisión de 24 de agosto de 1990 *International Standard Electric Corporation (USA) v. Bridas Sociedad Anónima Petrolera, Industrial y Comercial (Argentina)*, 745 F. Supp. 172 [S.D.N.Y. 1990]).

Contrariamente a ese criterio, tribunales de diferentes jurisdicciones han declarado su competencia en orden a la anulación de un laudo extranjero (como en el caso de los tribunales de Pakistán referido más arriba -asunto *American Machinery*-), cuestión a la que más adelante habremos de volver repetidamente para recordar las consecuencias de esas anulaciones del laudo en orden a su reconocimiento en otras jurisdicciones.

Ocean Line (1991)

Mediante decisión de 18 de abril de 1991 la Cour d'Appel de Douai (Francia) concedió el reconocimiento a un laudo dictado en Gdansk (Polonia) y recurrido en anulación, y a pesar de que la Economic Court de Gdansk (decisión de 22 de mayo de 1990) había suspendido su ejecución hasta que resolviera sobre la nulidad; reconocimiento del laudo que fue confirmado por la Cour de Cassation considerando que "l'article VII de la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, à laquelle la France et la Pologne sont parties, ne prive aucun intéressé du droit de se prévaloir d'une sentence arbitrale, de la manière et dans la mesure admise para la législation du pays où la

sentence est invoquée; qu'il en résulte que le juge français ne peut, lorsque la sentence a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel elle a été rendue, refuser l'exécution pour ce cas qui n'est pas au nombre de ceux énumérés par l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile, bien qu'il soit prévu par l'article V 1 e) de la convention de 1958; que c'est donc à juste titre que la Cour d'Appel a décidé que le recours en annulation exercé ainsi que le sursis à exécution obtenu en Pologne ne sauraient justifier le refus d'exécution en France" (decisión de 10 de marzo de 1993, Chambre Civile 1, N° de pourvoi: 91-16041, *Polish Ocean Line (Polonie) v. Jolasry, S.A. (France)*, Bulletin 1993 I N° 99 p. 66).

Hillmarton (1991)

Ocho meses después de la decisión de la Cour d'Appel de Douai en el asunto *Ocean Line*, la Cour d'Appel de Paris reconoció un laudo dictado en Suiza, anulado por la Cour de Justice del Cantón de Ginebra (decisión de 17 de noviembre de 1989, XIX Yearbook Com. Arb. 1994 p. 214; confirmada el Tribunal Federal suizo mediante decisión de 17 de abril de 1990, Revue de l'Arbitrage 1993, p. 315), considerando "que d'après l'article 7 de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences étrangères, signée à New-York le 10 juin 1958, les dispositions de la Convention ne privent aucune partie intéressée du droit qu'elle pourrait avoir de se prévaloir d'une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admises para la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée [...] qu'il résulte de cette disposition que le juge ne peut refuser l'exequatur lorsque son droit national l'autorise [...] que dès lors les dispositions de l'article 5-1e de la Convention, qui prévoient le refus d'exequatur d'une sentence annulée dans son pays d'origine, doivent être écartées lorsque le droit du pays où l'exécution de la sentence est requise permet cette exécution [...] que'en l'espèce, s'agissant de la reconnaissance et de l'exécution en France d'une sentence rendue à Genève, l'annulation de cette sentence par la juridiction helvétique ne constitue pas, aux termes de l'article 1502 de nouveau Code de procédure civile, un cas de refus de l'exequatur [...] que dans ces conditions, OTV est fondée, en vertu de l'article 7 de la Convention précitée, à se prévaloir des règles françaises de l'arbitrage international pour demande l'exequatur en France de la sentence"; considerando en fin "que le droit français de l'arbitrage international ne fait pas obligation au juge français de tenir compte de la décision d'annulation de la sentence prise dans l'ordre interne étranger, et que, dès lors, l'insertion dans l'ordre juridique français d'un sentence rendue en matière d'arbitrage international, annulée à l'étranger par application de la loi locale, n'est pas contraire à l'ordre public international, au sens de l'article 1502, 5<sup>a</sup>, du nouveau Code de procedure civile" (decisión de 19 de diciembre de 1991, 1ère chambre, section C, arrêt n° 7, *Hilmarton Ltd v. Omnium de Traitement et de Valorisation OTV France*, N° Répertoire Général 90-I6 778).

La Cour de Cassation confirmó la decisión de la Cour d'Appel considerando que "c'est à juste titre que l'arrêt décide qu'en application de l'article VII de la Convention de New York de 10 janvier 1958, la société OTV était fondée à se prévaloir des règles

françaises relatives à la reconnaissance et à l'exécution de sentences rendues à l'étranger en matière d'arbitrage international et notamment de l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile qui ne retient pas, au nombre des cas de refus de reconnaissance et d'exécution, celui prévue par l'article V de la Convention de 1958"; y "attendue, en fin, que la sentence rendue en Suisse était une sentence internationale qui n'était pas intégrée dans l'ordre juridique de cet Etat, de sorte que son existence demeurait établie malgré son annulation et que sa reconnaissance en France n'était pas contraire à l'ordre public international" (decisión de 23 de marzo de 1994, Civ. 1, Arrêt n° 484, pourvoi n° 92-15.137 D, *Société Hillmarton LTD (UK) v. Société Omnium de Traitement et de Valorisation -OTV- (France)*, Bulletin 1994 I N° 104, p. 79).

Radenska (1992)

La cuestión volvió a suscitarse en relación con un laudo dictado en Belgrado en el marco de la Corte de Arbitraje para el Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Yugoslavia, que fue anulado por el Vrhovno Sodišče Republike Slovenije -Tribunal Supremo eslovaco- (por considerarlo contrario al orden público en cuanto el contrato litigioso creaba un monopolio o cuanto menos una posición de privilegio en el mercado), revocando las anteriores decisiones del Tribunal de Primera Instancia de Murska Sobota (decisión de 13 de abril de 1989) y del Tribunal de Apelación de Maribor (18 de noviembre de 1991) que habían desestimado la nulidad del laudo.

El laudo fue reconocido en Austria por el Tribunal de Primera Instancia de Viena (decisión de 17 de marzo de 1989), solicitándose a continuación la ejecución del laudo ante el Tribunal de Distrito de Bad Radkersburg, que desestimó la oposición a la ejecución basada en la anulación del laudo (decisión de 25 de noviembre de 1992); decisión ésta que fue revocada por el Tribunal de Apelación de Graz considerando que la anulación del laudo impedía efectivamente su reconocimiento y ejecución en Austria. Esa decisión de apelación fue sin embargo revocada a su vez por el Oberster Gerichtshof que confirmó en cambio la decisión del Tribunal de Distrito de Bad Radkersburg, considerando que "la anulación en un Estado contratante de un laudo arbitral sujeto al Convenio Europeo (sobre arbitraje comercial internacional de 21 de abril de 1961), como es el caso, no constituye, conforme al artículo IX del Convenio, causa de denegación del reconocimiento, sino cuando la anulación ha sido declarada en el Estado en el que, o con arreglo a cuya ley, ha sido dictado el laudo, por uno de los motivos especificados en el primer párrafo del artículo IX: la anulación de un laudo por infracción del orden público del Estado contratante en el que el laudo ha sido dictado no aparece, según constatación literal, entre los motivos enumerados de manera limitativa en el primer párrafo del artículo IX del Convenio, que justifican la denegación de reconocimiento de un laudo. [...] Con razón se ha señalado que se añadió un segundo párrafo al artículo IX del Convenio europeo para que esta limitación vincule también a los Estados que son parte, tanto del Convenio europeo, como del Convenio de Nueva York [...] El párrafo primero del artículo IX del Convenio europeo tiene por efecto, según el párrafo segundo del artículo IX, limitar a los motivos de anulación que enumera la aplicación del

artículo V, párrafo 1.c de la Convención de Nueva York. La infracción del orden público del país en que ha sido dictado el laudo no se encuentra entre esos motivos. [...] Contrariamente al criterio del tribunal de apelación, la infracción del orden público del país de origen del laudo no es un concepto que esté comprendido en el numeral c) del primer párrafo del artículo IX" (decisión de 20 de octubre de 1993, *DO Zdravilišče Radenska (Slovakei) v. Kajo-Erzeugnisse Essenzen GmbH. (Österreich)*, 49 OJZ, 1994, p. 513).

La decisión del Tribunal de Primera Instancia de Viena (de 17 de marzo de 1989) que reconoció el laudo fue también objeto de recurso, que el propio tribunal desestimó (decisión de 1 de diciembre de 1994), como igualmente la Corte de Apelación de Viena desestimó la apelación (decisión de 10 de julio de 1995). El Oberster Gerichtshof (decisión de 23 de febrero de 1998, XXIV Yearbook Com. Arb. [1999] Austria No. E3) confirmó esas decisiones, reafirmando en el criterio expresado en su decisión de 20 de octubre de 1993.

#### Unichips (1993)

En relación con un laudo firmado en Lausanne (Suiza) y París el 18 y 27 de diciembre de 1990, respectivamente, reconocido en Francia por decisión de 19 de febrero de 1992 del Presidente del Tribunal de Grande Instance de París, la Cour d'Appel, confirmando, tuvo oportunidad de reiterar "qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de la Convention de New-York que, si les conditions de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence arbitrale exigées par le droit commun français sont moins sévères que celles de ladite Convention, c'est le droit commun français plus favorable qui doit prévaloir" (decisión de 12 de febrero de 1993, *Unichips Finanziaria SPA (Italie) v. Unichips International BV (Hollande)*, n° Répertoire Général 92-12 017).

#### Chromalloy (1996)

En 1996 un laudo dictado (el 14 de agosto de 1994) en El Cairo (Egipto) y anulado por la Cour d'Appel de El Cairo (decisiones de 4 de abril y 5 de diciembre de 1995) fue no obstante reconocido por el US District Court for the District of Columbia considerando que la decisión de los tribunales egipcios infringía el orden público de los Estados Unidos en cuanto contraria al acuerdo de las partes de no recurrir el laudo. Haciendo notar que el asunto era "a case of first impression", el District Court razonó su decisión considerando que "[u]nder [article V of] the [New York] Convention, recognition and enforcement of the award may be refused if Egypt furnishes to this Court proof that [t]he award has been set aside by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made. [...] In the present case, the award was made in Egypt under the laws of Egypt and has been nullified by the court designated by Egypt to review arbitral awards. [...] Article VII of the Convention requires that the provisions of the present Convention shall not deprive any interested party of any right he may have to avail himself of an arbitral award in the manner and to the extent allowed by the law of the count[r]y where such award is sought to be relied upon. Article VII does not eliminate all consideration of

Article V; it merely requires that this Court protect any rights [...] under the domestic laws of the United States. [...] Under the laws of the United States arbitration awards are presumed to be binding and may only be vacated by a court under very limited circumstances [...] The Court has reviewed the voluminous submissions of the parties and finds no evidence that corruption, fraud or undue means was used in procuring the award or that the arbitrators exceeded their powers in any way. [...] The Court's analysis thus far has addressed the arbitral award, and, as a matter of U.S. law, the award is proper. [...] The Court concludes that the award of the arbitral panel is valid as a matter of U.S. law. [...] The Court now considers the question of whether the decision of the Egyptian court should be recognized as a valid foreign judgment. [...] [T]he question is whether this Court should give res judicata effect to the decision of the Egyptian Court of Appeal, not whether that court properly decided the matter under Egyptian law [...] Indeed, the Court assumes that the decision of the Court of Appeal at Cairo is proper under applicable Egyptian law. [...] The arbitration agreement is a contract and the court will not rewrite it for the parties. [...] The clause reads, in relevant part: 'It is ... understood that both parties have irrevocably agreed to apply Egypt (sic) Laws and to choose Cairo as seat of the court of arbitration. ... The decision of the said court shall be final and binding and cannot be made subject to any appeal or other recourse'. [...] The Court concludes that the first sentence defines choice of law and choice of forum for the hearings of the arbitral panel. The Court further concludes that the second quoted sentence indicates the clear intent of the parties that any arbitration of a dispute arising under the contract is not to be appealed to any court. [...] The invalidation of such an agreement would [...] allow the respondent to repudiate its solemn promise [...] The delegates to the [New York] Convention voiced frequent concern that courts of signatory countries in which an agreement to arbitrate is sought to be enforced should not be permitted to decline enforcement of such agreements on the basis of parochial views of their desirability or in a manner that would diminish the mutually binding nature of the agreements [...] The U.S. public policy in favor of final and binding arbitration of commercial disputes is unmistakable, and supported by treaty, by statute, and by case law. The Federal Arbitration Act and the implementation of the Convention in the same year by amendment of the Federal Arbitration Act, demonstrate that there is an emphatic federal policy in favor of arbitral dispute resolution, particularly in the field of international commerce. [...] There is a strong public policy behind judicial enforcement of binding arbitration clauses. A decision by this Court to recognize the decision of the Egyptian court would violate this clear U.S. public policy. [...] The Court further concludes that it need not grant res judicata effect to the decision of the Egyptian Court of Appeal at Cairo" (decisión de 31 de julio de 1996, *Chromalloy Aeroservices Inc (USA) v. Arab Republic of Egypt*, 939 F.Supp. 907 [D.D.C.1996]).

El laudo fue asimismo reconocido en Francia, primero por decisión del Presidente del Tribunal de Grande Instance de París de 4 de mayo de 1995 (aunque su ejecución suspendida) y después por la Cour d'Appel de París que confirmó la decisión de instancia considerando "que

l'article 33 de la convention de la coopération judiciaire signée entre la France et l'Egypte le 15 mars 1982 dispose 'les sentences arbitrales rendues dans l'un des deux Etats sont reconnues et exécutées dans l'autre Etat selon les dispositions de la Convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères' [...] [Q]u'il se déduit de ce renvoi général et sans réserve aux stipulations conventionnelles adoptées à New-York en 1958, que les parties contractantes ont aussi implicitement accepté l'exception de son article VII aux termes duquel les dispositions de la Convention de New-York ne privent aucune partie intéressée, au droit qu'elle pourrait avoir de se prévaloir d'une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admises par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée. [...] [Q]u'ainsi le juge français ne peut refuser l'exequatur que dans les cas prévus et limitativement énumérés par l'article 1502 du Nouveau Code de Procédure Civile qui constitue son droit national en la matière. [...] [Q]ue cet article 1502 du Nouveau Code de Procédure Civile, ne retient pas au nombre des cas de refus de reconnaissance et d'exécution, celui prévu par l'article 5 de la Convention de 1958 dont l'application doit en conséquence être écartée. [...] [Q]ue la sentence rendue en Egypte était une sentence internationale qui par définition, n'était pas intégrée à l'ordre juridique de cet Etat de sorte que son existence est demeurée établie malgré son annulation" (decisión de 14 de enero de 1997, *Republique Arabe d'Egypte v. Société Chromalloy Aero Services*, 1 chambre, section C, R.G. N° 95/23025).

#### Sovereign (1999)

Mediante decisión de 28 de enero de 1999 la Cour d'Appel de Luxembourg, confirmando la decisión de 28 de abril de 1998 del Président de Tribunal d' Arrondissement, reconoció un laudo dictado en Ginebra (Suiza) y recurrido de nulidad ante el Tribunal Federal, considerando la Cour d'Appel que "la législation applicable à l'exéquatour est donc la Convention de New-York du 10 juin 1958 (ci-après: la Convention) approuvée par la loi du 20 mai 1983 [...] [L]'article VII [de la Convention] constitue une disposition 'du droit le plus favorable' destinée à rendre possible l'exécution des sentences étrangères dans le plus grand nombre de cas possible à tel point que les possibilités de refus inscrites à l'article V, 1 de la Convention ne constituent que des hypothèses minimales de reconnaissance de sentences laissant à chaque Etat le soin d'apprécier s'il y a lieu d'être plus liberal [...] [Q]u'aux termes de la Convention, le juge luxembourgeois ne peut refuser l'exéquatour que pour une des causes prévues par son droit national et que l'article 1028-2 (réglement grand-ducal du 8 decembre 1981 ) du code de procedure civile ne retient pas, parmi ces causes, le cas où la sentence est l'objet d'un recours à l'étranger".

Lo que importa es que la Cour afirmó además que el laudo podría ser reconocido aunque llegara a ser anulado: "L'article VII peut ainsi conduire à des situations susceptibles de paraître inattendues, voire absurdes selon la partie appelante, en ce que la possible annulation en Suisse de la sentence litigieuse n'empêche pas qu'elle puisse être exéquatourée au Luxembourg en vertu de l'article 1028-2 du code de

procedure civile, qui ne retient pas au nombre des cas de refus de reconnaissance et d'exécution d'une sentence étrangère son annulation dans son pays d'origine" (*Sovereign Participations International, S.A. (Luxembourg) v. Chadmore Developments Ltd. (Ireland)*, Huitième Chambre, Numéro 22402).

#### Baker Marine (1999)

En 1999 y a pesar del precedente *Chromalloy*, la US Court of Appeals del Segundo Circuito, confirmando la decisión de instancia, denegó el reconocimiento en los Estados Unidos a dos laudos dictados en Lagos (Nigeria), anulados por los tribunales nigerianos (en noviembre 1996 y mayo 1997, el primero por *ultra petita* arbitral y el segundo por carecer de soporte probatorio), considerando que "Baker Marine contends that the awards were set aside by the Nigerian courts for reasons that would not be recognized under U.S. law as valid grounds for vacating an arbitration award [...] We reject Baker Marine's argument. It is sufficient to answer that the parties contracted in Nigeria that their disputes would be arbitrated under the laws of Nigeria. The governing agreements make no reference whatever to United States law. Nothing suggests that the parties intended United States domestic arbitral law to govern their disputes [...] If a party whose arbitration award has been vacated at the site of the award can automatically obtain enforcement of the awards under the domestic laws of other nations, a losing party will have every reason to pursue its adversary with enforcement actions from country to country until a court is found, if any, which grants the enforcement. [...] Baker Marine argues that this use of the permissive 'may', rather than a mandatory term, implies that the court might have enforced the awards, notwithstanding the Nigerian judgements vacating them. It is sufficient answer that Baker Marine has shown no adequate reason for refusing to recognize the judgements of the Nigerian court." La Court of Appeal cuidó de explicar que su decisión se separaba de *Chromalloy* porque el caso no era el mismo: "This case is unlike *In re Chromalloy Aeroservices* [...] In that case, the government of Egypt had entered a contract with an American company agreeing that disputes would be submitted to arbitration and that the decision of the arbitrator could not be made subject to any appeal or other recourse [...] the Egyptian government appealed to its own courts, which set aside the award. The district court concluded that Egypt was seeking to repudiate its solemn promise to abide by the results of the arbitration, and that recognizing the Egyptian judgement would be contrary to the United States policy favoring arbitration [...] Chevron and Danos did not violate any promise in appealing the arbitration award within Nigeria. Recognition of the Nigerian judgement in this case does not conflict with United States public policy" (decisión de 12 de agosto 1999 (*Baker Marine (Nig.) Ltd. v. Chevron (Nig.) Ltd. and Chevron Corp., Inc. - Baker Marine (Nig.) Ltd. v. Danos and Curole Marine Contractors, Inc.*, 191 F. 3d 194 [2nd Cir. 1999])).

#### Spier (1999)

Casi coetánea con Baker Marine es la decisión del US District Court for the Southern District de Nueva York denegando el reconocimiento

de un laudo dictado en Italia, pero anulado (en razón del incumplimiento por el árbitro de su mandato arbitral) por los tribunales de instancia de Treviso, de apelación de Venecia y Supremo de Casación de Italia. El District Court señaló que "in view of the then pending Italian court proceedings, this Court in *Spier I* [663 F. Supp. 871 (S.D.N.Y. 1987) ("*Spier I*")] stayed decision on the parties' cross-petitions until the Italian courts had decided the case, a procedural option extended to the authority where enforcement is sought by Article VI of the [New York] Convention"; y considerando que "the award at bar was set aside by that state's highest tribunal, the Supreme Court of Cassation of Italy [...] *Spier* cannot be heard to argue that the Italian courts' decisions should not be recognised on the ground that an american court would reach a different result with respect to the award if it had been rendered in the United States [...] *Spier*'s reference to the permissive 'may' in Art. V(1) of the Convention does not assist him since, as in *Baker Marine*, *Spier* has shown no adequate reason for refusing to recognize the judgements of the Italian courts". El District Court quiso explicar también por qué no seguía el precedente *Chromalloy*, diciendo: "the *Chromalloy* district court's reliance upon the FAA [Federal Arbitration Act] to disregard an Egyptian court's decision nullifying an Egyptian award was prompted by a particular circumstance not present in the case at bar: Egypt's blatant disregard of its contractual promise not to appeal an award"; lo que de ninguna manera se daba en el caso *Spier*" (decisión de 22 octubre de 1999 *Martin I. Spier (US) v. Calzaturificio Tecnica S.p.A. (Italy)*, 71 F. Supp. 2d 279, S.D.N.Y.1999).

#### Oberlandesgericht de Rostock (1999)

Pendiente de decisión definitiva sobre anulación del laudo, el Oberlandesgericht de Rostock (Alemania) denegó el reconocimiento a un laudo dictado en Moscú en el marco de la Comisión de Arbitraje de Asuntos Marítimos de la Cámara de Comercio e Industria de Moscú, anulado por los tribunales rusos (por decisión de 12 de abril de 1999 del District Court de Moscú, confirmada en apelación por otra de 25 de junio de 1999, que fue a su vez recurrida), considerando que "el reconocimiento de un laudo arbitral tiene que ser denegado conforme al artículo V(1)(e) del Convenio de Nueva York. El reconocimiento requiere que el laudo haya devenido obligatorio conforme a la ley que le sea aplicable [...] Un laudo no es ya obligatorio cuando ha sido anulado por un tribunal competente o un tribunal de apelación, incluso aunque esa decisión no sea todavía temporalmente susceptible de ejecución. Esta decisión de anulación debe ser reconocida sin entrar a examinar si sería o no susceptible de ser reconocida por aplicación de los criterios aplicables al reconocimiento de las sentencias extranjeras. El laudo en nuestro caso fue anulado por el tribunal del distrito de Moscú y por el tribunal de apelaciones de Moscú; por tanto, no es ya obligatorio y no puede ser reconocido en Alemania. [...] Ciertamente, según el derecho ruso las decisiones de los citados tribunales son todavía susceptibles de recurso. Sin embargo, eso es irrelevante de acuerdo con la segunda alternativa del artículo V(1)(e) (obligatorio "*o suspendido*")" (decisión de 28 de octubre de 1999, OLG Rostock 1 Sch 3/99).

El 24 de noviembre de 1999 el Presidente del Tribunal Supremo de la República Rusa anuló la decisión de apelación (de 25 de junio de 1999) y ordenó devolver el asunto al Tribunal del Distrito de Moscú que, juzgando de nuevo el caso, rechazó la pretendida nulidad del laudo (decisión de 20 de marzo de 2000, confirmada en apelación por otra de 21 de abril de 2000). Por ello, el Bundesgerichtshof - Tribunal Federal de Justicia de Alemania- resolvió el recurso contra la decisión del Oberlandesgericht de Rostok considerando que "el motivo de denegación del reconocimiento del artículo V(1)(e) del Convenio de Nueva York no existe ya en el estado actual de las cosas" (decisión de 22 de febrero de 2001, BGH, III ZB 71/99)

#### N'Doy (2000)

En el año 2000 la Cour de Cassation francesa tuvo oportunidad de reafirmar su criterio. Un laudo interno, no internacional, dictado en Dakar y recurrido con efecto suspensivo ante los tribunales de Senegal fue reconocido en Francia y el reconocimiento confirmado por la Cour d'Appel de París (decisión de 16 de octubre de 1997) y por la Cour de Cassation considerando ésta "que les dispositions des articles 1498 et suivants du nouveau Code de procédure civile sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales sont applicables à la fois aux sentences arbitrales internationales et aux sentences rendues à l'étranger, quel que soit, pour ces dernières, leur caractère interne ou international; que, dès lors, la Cour d'Appel a justement décidé qu'en vertu de l'article VII-1 de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères [...] le droit français de l'arbitrage international, plus favorable, devait être mis en oeuvre, de sorte que par application de l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile, le moyen invoqué par ASECNA, tiré du caractère non exécutoire de la sentence en raison de l'exercice, au Sénégal, d'un recours suspensif, ne pouvait être accueilli" (decisión de 17 de octubre de 2000, Chambre civile 1, 98-11.776, *Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) v Issakha N'Doy*, Bulletin 2000 I N° 243 p. 160),

#### Nirma (2002)

En diversas oportunidades los tribunales de India han declarado su competencia extraterritorial en orden a la anulación de un laudo extranjero, es decir, no dictado en India. Así, por ejemplo, en relación con un laudo CCI sobre jurisdicción de los árbitros, dictado en Londres, la High Court de Gujarat consideró que "[i]t is Indian law which governs the contract [...] [T]he contract itself, including the arbitration agreement contained in one of its clauses, was redolent of India and matters Indian. The disputes between the parties under the contract had no connection with anything English, and they had the closest connection with Indian laws, rules and regulations. [...] The parties in the instant case having agreed that the agreement (including the arbitration thereunder) shall be governed according to the laws of India, the arbitral award has to be held to have been made under Part I [of the 1966 Arbitration and Conciliation Act of India] and has to be considered as a domestic award, though made on foreign soil according to the ICC Rules and

Procedure. [...] In view of the above, we have no hesitation in holding that the Indian Court was the Court of competent jurisdiction to entertain an application under Sect. 34 for setting aside the award. [...] The recourse to a Court under Sect. 34 cannot be said to have been waived by subscribing to the ICC Rules of Arbitration."

A pesar de ello la High Court no entró a juzgar sobre la nulidad del laudo porque entendió que "an arbitral decision rejecting an objection to the arbitral tribunal's jurisdiction is clearly distinguishable and by no stretch can be considered to be synonymous with an award [...] [T]he 1996 Act explicitly considers a decision on jurisdiction to be not an award but an order or a decision. [...] Such decision or order on jurisdiction may be challenged while taking recourse to a Court against the arbitral award made upon continuation with the arbitral proceedings after the aforesaid decision" (decisión de 19 de diciembre de 2002 (*Nirma Ltd. v. Lurgi Energie und Entzorgung (Germany) et al*, XXVIII Yearbook Com. Arb. India n° 39. 790 [2003])).

A la evolución de criterio que han seguido los tribunales de India en cuanto a sus competencias de anulación de laudos dictados fuera de India volveremos más adelante, respetando así la cronología de las cosas y los casos según han ido produciéndose.

#### Karaha Bodas (2003)

En 2001 el US District Court (Southern Division) de Texas reconoció un laudo dictado en Suiza cuya nulidad había sido pretendida ante el Tribunal Federal suizo, que inadmitió el recurso por razones meramente procesales (decisión del US District Court de 4 de diciembre de 2001, *Karaha Bodas Company, L.L.C. (Cayman Islands) v. Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) (Indonesia)*, 190 F. Supp. 2d 936 [2001]). Esta decisión fue apelada.

El laudo fue posteriormente anulado por el Central District Court de Jakarta (Indonesia), afirmando su competencia extraterritorial en orden a esa anulación y considerando el laudo contrario a la ley indonesia de arbitraje (decisión de 27 de agosto de 2002). No obstante esa anulación, el District Court de Texas reiteró el reconocimiento del laudo considerando que "[t]he New York Convention contemplates two types of court proceedings following an arbitral award: (i) proceedings to annul or set aside the arbitral award, and (ii) proceedings seeking recognition and enforcement of the arbitral award. [...] The country in which, or under the law of which, the award was made is the court of 'primary jurisdiction'. Proceedings for recognition and enforcement of an arbitration award may be brought in the courts of any signatory country to the Convention. Such courts are said to have 'secondary jurisdiction. [...] The general enforcement scheme of the New York Convention is not a matter of dispute. The issue [...] is whether, under that scheme, Indonesia has primary jurisdiction over the Arbitral Award. In its 26 April 2002 Preliminary Injunction, this Court concluded that the arbitration was conducted under the arbitral law of Switzerland, and thus Swiss courts have primary jurisdiction over the award. The Court stands by that decision, as explained hereafter. Because the Swiss

Supreme Court rejected Pertamina's appeal, albeit on procedural grounds, Pertamina does not have a cognizable defense to the enforcement of the arbitral award under Art. V(1)(e) of the New York Convention [...] Given the extensive detail of the parties' contracts, and the enormity of the project related finances, the parties –had they in fact desired– could have included a provision specifically incorporating Indonesian arbitral law despite the arbitration situs in Switzerland. Had they done so, they would have altered the standard territorial rule on applicable arbitral law. The parties did not do so. [...] Thus, by choosing to arbitrate in Geneva, Switzerland, and not including an express provision stating that Indonesian law governs the arbitration, the parties expressed their intent that the arbitration would be governed by Swiss law [...] Art. V(1)(e) of the New York Convention provides that a court should deny enforcement of an arbitral award that has been annulled or set aside 'by a competent authority of the country in which, or under the law of which' the award was made. This means that a court of secondary jurisdiction, such as this one, is discouraged from enforcing an award that has been set aside by a court of primary jurisdiction [...] Because the Central Jakarta District Court is not a court of competent jurisdiction in light of the parties' contract, the other facts presented, and the New York Convention, the Indonesian court's ruling purporting to annul the arbitral award has no legal effect on this Court's 4 December 2001 final judgment confirming that award" (decisión de 17 de abril de 2003, 264 F. Supp. 2d 490 [2003]).

Esta decisión del District Court de Texas fue también apelada. La Court of Appeals (Fifth Circuit) confirmó las decisiones de reconocimiento del District Court, considerando que "only a court in a country with primary jurisdiction over an arbitral award may annul that award. Under the Convention, the country in which, or under the [arbitration] law of which, [an] award was made' is said to have primary jurisdiction over the arbitration award [...] Courts have held that the language, 'the competent authority of the country ... under the law of which, that award was made' refers exclusively to procedural and not substantive law, and more precisely, to the regimen or scheme of arbitral procedural law under which the arbitration was conducted, and not the substantive law applied in the case [...] In selecting Switzerland as the site of the arbitration, the parties were not choosing a physical place for the arbitration to occur, but rather the place where the award would be 'made'. Under Art. 16(1) of the UNCITRAL Rules, the 'place' designated for an arbitration is the legal rather than physical location of the forum [...] Under the New York Convention, an agreement specifying the place of the arbitration creates a presumption that the procedural law of that place applies to the arbitration [...] Pertamina contends that the Convention's language permitting annulment by a court in 'the country in which, or under the law of which, that award was made' allows for two potential primary jurisdiction countries –the country who hosted the arbitration proceeding, and the country whose arbitral procedural law governed that proceeding. Using this reasoning, Pertamina suggests that both Switzerland (the host country) and Indonesia (the country of governing law) have primary jurisdiction over the arbitration in this case [...] Ambiguity is

derived from the fact that the formula does not indicate whether the party seeking the annulment of the award must choose between the court at the seat of the arbitration and the one located in the country under the law of which the award is made -if the two are distinct- or whether it may seek annulment jointly or alternatively before both courts. Art. V(1)(e) of the New York Convention could be construed as referring to the courts of only one country while giving the party seeking the annulment the possibility to choose between the two countries should the two be distinct [...] Although an arbitration agreement may make more than one country eligible for primary jurisdiction under the New York Convention, the predominant view is that the Convention permits only one in any given case [...] Such 'exclusive' primary jurisdiction in the courts of a single country is consistent with the New York Convention's purpose; facilitates the orderliness and predictability necessary to international commercial agreements and implements the parties' choice of a neutral forum. In this case, both of the New York Convention criteria for the country with primary jurisdiction point to Switzerland -and only to Switzerland" (decisión de 23 de marzo de 2004, 364 F.3d 274 [2004]).

Importa recordar además que, comoquiera que, con anterioridad, el mismo District Court de Texas había dictado una orden ('injunction') prohibiendo que se siguiera adelante el recurso contra el laudo ante los tribunales de Indonesia (decisión de 26 de abril de 2002, 264 F. Supp. 2d 470 [2003]), la Court of Appeals revocó esa 'injunction', considerando que "although Indonesia has already purported to annul the award, such annulment in no way affects the authority of the District Court (or this Court) to enforce the award in the United States -which is, after all, the principal task of a US Court under the Convention. And the award can be enforced here with or without the District Court's injunction against Pertamina. Similarly, other enforcement jurisdictions will be forced independently to weigh the Indonesian annulment, with or without awareness of a US Court's injunction. Inasmuch as the [New York] Convention provides for multiple proceedings and a more limited role for enforcement jurisdictions, Pertamina's actions in Indonesia, even if spurious, are less vexatious and oppressive than they would be outside of this Treaty structure. Finally, given the absence of a practical, positive effect that any injunction could have, more weighty considerations of comity dictate that the better course for US Courts to follow is to avoid the appearance of reaching out to interfere with the judicial proceedings in another country and to avoid stepping too far outside its limited role under the Convention" (decisión de 18 de junio de 2003, 335 F.3d 357 [2003]).

#### Putrabali (2003)

El 10 de abril de 2001, en el marco de la International General Produce Association (IGPA), se dictó en Londres un laudo que la High Court de Londres, mediante decisión de 19 de mayo de 2003 y resolviendo una 'appeal on a point of law', anuló parcialmente, reenviando el caso a los árbitros para que dictaran un nuevo laudo; segundo laudo que los árbitros dictaron el 31 de agosto de 2003. Ambos laudos fueron reconocidos por el Presidente del Tribunal de

Grande Instance de Paris (decisiones de 30 de septiembre de 2003 y de 10 de febrero de 2004, respectivamente).

El reconocimiento del primer laudo fue confirmado por la Cour d'Appel de Paris considerando que "la société Putrabali dit que la demande d'exequatur est une fraude, car la sentence présentée est une fausse version, dans la mesure où cette sentence a été annulée par un jugement de la High Court de Londres le 19 mai 2003 et est désormais remplacée par une autre sentence rendue le 21 août 2003. La société Putrabali rappelle que la fraude corrompt tout, ajoute que la seconde sentence a été exequaturée par décision du 10 février 2004 du Président du Tribunal de grande instance de Paris, et elle termine en soutenant qu'en tout état de cause, la société Est Epices est dépourvue de tout intérêt légitime à solliciter l'exequatur d'une sentence annulée, car son seul dessein est de faire obstacle à l'exécution de la sentence définitive. Considérant que les cas d'ouverture de l'appel de la décision qui accorde la reconnaissance de l'exequatur d'une sentence sont limitativement énumérées à l'article 1502 du NCPC, que l'annulation de la sentence dans le pays d'origine n'est pas l'un de ces motifs, que l'ordonnance du 30 septembre 2004 est confirmée, d'autant que la décision d'exequatur de la sentence suivante rendue après annulation de celle dont l'exequatur est demandé, le 10 février 2004, non définitive, a été frappée d'appel le 21 octobre 2004 par la société Rena Holding" (decisión de 31 de marzo de 2005, *Société PT Putrabali Adyamulia (Indonesie) v. Société Rena Holding (Est Epices, S.A) (France)*, 1re Ch. C, 2004/03587).

El reconocimiento del segundo laudo fue en cambio revocado por la Cour d'Appel de Paris considerando "que l'arrêt du 31 mars 2005 fait désormais obstacle à toute reconnaissance ou exécution en France de la sentence du 31 août 2003 rendue à Londres et ayant accueilli les demandes de condamnation de la société Putrabali comme le demandait le juge anglais, l'accueil de la deuxième sentence étant inconciliable avec le premier exequatur accordé" (decisión de 17 de noviembre de 2005, *Société Rena Holding (Est Epices, S.A) (France) v. Société PT Putrabali Adyamulia (Indonesie)*, 1re Ch. C, 04/20926).

La decisión de la Cour d'Appel que confirmó el reconocimiento del primer laudo fue asimismo confirmada por la Cour de Cassation considerando "que la sentence internationale, qui n'est rattachée à aucun ordre juridique étatique, est une décision de justice internationale dont la régularité est examinée au regard des règles applicables dans le pays où sa reconnaissance et son exécution sont demandées; qu'en application de l'article VII de la Convention de New-York du 10 janvier de 1958 la société Rena Holding était recevable à présenter en France la sentence rendue à Londres le 10 avril 2001 conformément à la convention d'arbitrage et au règlement de l'IGPA, et fondée à se prévaloir des dispositions du droit français de l'arbitrage international, qui ne prévoit pas l'annulation de la sentence dans son pays d'origine comme cause de refus de reconnaissance et d'exécution de la sentence rendue à l'étranger. Que dès lors, c'est sans encourir les griefs du pourvoi que la Cour d'Appel a décidé, à bon droit, que la sentence de 10

avril 2001 devait recevoir l'exequatur en France" (decisión de 29 de junio de 2007, 1ère chambre civile, arrêt no. 1021 [05-18.053]).

La decisión de la Cour d' Appel que denegó el reconocimiento al segundo laudo fue asimismo confirmada por la Cour de Cassation "attendu que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 31 mars 2005, qui avait déclaré la société Rena Holding recevable et fondée à obtenir l'exécution en France de la sentence du 10 avril 2001, faisait objet à l'exequatur de la sentence du 21 août 2003, inconciliable avec la première" (decisión de 29 de junio de 2007, 1ère chambre civile, arrêt no. 1022 [06-13.293]).

Vino a resultar así que un laudo anulado (el primero) fue reconocido en Francia en tanto que al segundo laudo, no anulado, le fue denegado el reconocimiento. Una parte de la doctrina presenta *Putrabali* como paradigma de lo inaceptable. Desde la filosofía anacional del arbitraje internacional se presenta *Putrabali*, en cambio, como irreprochable consecuencia de aquélla.

#### Bargues (2004)

Un laudo dictado el 28 de junio de 2002 en Anvers (Bélgica), en el marco de la Unión professionnelle belge pour l'importation de denrées alimentaires -Belgafood-, fue reconocido en Francia por decisión de 10 de enero de 2003 del Presidente del Tribunal de Grande Instance de Paris. Aunque el laudo estaba recurrido de nulidad ante el Tribunal de Grande Instance de Anvers, el reconocimiento fue confirmado por la Cour d'Appel de Paris considerando que "la sentence rendue le 28 juin 2002 à Anvers [...] prononcée dans le cadre d'un arbitrage international où sont en cause les intérêts du commerce international [...] n'est pas intégrée dans l'ordre juridique belge de sorte que son éventuelle annulation par le juge du siège ne porte pas atteinte à son existence en empêchant sa reconnaissance et son exécution dans d'autres ordres juridiques nationaux; [...] [L]es dispositions de l'article VI de la Convention de New York qui se réfèrent à l'article V en autorisant le juge de l'exécution à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'annulation n'offrent aucune utilité dans le système de la reconnaissance et de l'exécution de l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile. [...] [L]'article 1502 du nouveau Code de procédure civile, qui ne retient pas à la différence de l'article V(1)(e) de la Convention de New York du 10 juin 1958, au nombre de cas de refus de reconnaissance et d'exécution d'une sentence rendue à l'étranger, son annulation par le juge du siège de l'arbitrage, doit recevoir application sur le fondement même de l'article VII de la Convention d'après lequel 'les dispositions de la présente Convention ... ne privent aucune partie intéressée du droit qu'elle pourrait avoir de se prévaloir d'une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admise par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée' " (decision de 10 de junio de 2004, 1re chambre, section C, n° 184, *Bargues Agro Industrie, S.A. (France) v Young Pecan Company (USA)*, RG 2003/09894).

Betchel (2005)

Un laudo dictado el 20 de febrero de 2002 en el marco de la Cámara de Comercio e Industria de Dubai fue anulado por el Tribunal de Casación de Dubai (decisión de 15 de mayo de 2004), confirmando previas decisiones concordes de los Tribunales de Primera Instancia (decisión de 16 de noviembre de 2002) y de Apelación (decisión de 8 de junio de 2003), que consideraron que el juramento del testigo de decir verdad (exigido por el art. 216/2 de la Ley emiratí de Procedimientos civiles conforme a la fórmula "juro por el Altísimo decir verdad y solamente verdad") era cuestión indisponible, siendo en cambio sin embargo que el laudo se fundaba en declaraciones de testigos que no declararon bajo ese juramento, habiéndose limitado el árbitro a recordarles su obligación de decir verdad y las consecuencias que podrían seguirseles de no hacerlo.

El US District Court de Columbia suspendió su decisión sobre el reconocimiento del laudo hasta conocer la decisión, a la sazón pendiente, del Tribunal de Casación de Dubai, considerando que "[i]n no event will this Court undertake to decide whether witness oaths were properly administered in the arbitration as a matter of Dubai law, nor, indeed, does Bechtel ask for such a ruling. Instead, Bechtel seeks direct enforcement of the arbitration award without any regard for Dubai court proceedings subsequent to that award. Bechtel's position is that the proceedings of the Dubai courts in this matter are not entitled to international comity and that they should be ignored. [...] [T]he central precept of comity teaches that, when possible, the decisions of foreign tribunals should be given effect in domestic courts, but a special reason for declining comity exists when the foreign judgment is contrary to the crucial public policies of the forum in which enforcement is requested. [...] [A] state is not required to give effect to foreign judicial proceedings grounded on policies which do violence to its own fundamental interests or which are predicated on laws repugnant to the domestic forum's conception of decency and justice. [...] The Dubai court's invalidation of the arbitral award solely on the ground that witness oaths were not properly administered, where neither party objected to the form of the oaths when given, in the face of a contract provision stating plainly that the award would be final and binding and that there would be no appeal to any court, registers at the hypertechnical fringe of what Americans would call justice. Whether it is repugnant to fundamental notions of what is decent and just, however, remains to be seen, as (a) as Bechtel's appeal to the Dubai Court of Cassation has not been decided, and (b) neither party to this dispute has been able to say whether an affirmance by the Court of Cassation would have a preclusive effect on re-arbitration" (decisión de 5 de febrero de 2004, *International Bechtel Company Limited (Panama) v. Department of Civil Aviation of the Government of Dubai (United Arab Emirates)* 300 F.Supp. 2d 112 [D.D.C. 2004]). Conocida que fue la decisión del Tribunal de Casación de Dubai, el US District Court denegó el reconocimiento del laudo atendido un precedente que anteriormente no había tomado en cuenta y luego de concluir, mediante razonamientos que no importan aquí, que el demandante carecía de acción para pretender el reconocimiento del

laudo en los Estados Unidos (decisión de 8 de marzo de 2005, 360 F.Supp. 2d 136 [2005]).

Contrariamente a ello, el laudo fue reconocido en Francia por decisión de 21 de octubre de 2003 del Presidente del Tribunal de Grande Instance de París, que confirmó la Cour d'Appel considerando que "la Convention entre la France et les Emirats Arabes Unis relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 9 septembre 1991 vise, dans son chapitre V, la reconnaissance, outre celle des décisions judiciaires, des sentences arbitrales rendues sur le territoire de l'un des deux Etats; [...] [L]es principes fondamentaux de l'arbitrage dans notre pays tels qu'exprimés par les articles 1498 et suivants du nouveau Code de procédure civile, [...] poursuivent l'élimination des obstacles à la circulation internationale des sentences en n'érigeant pas l'annulation de la sentence dans l'Etat d'origine en cause de refus d'exequatur [...] [C]es principes n'ont, à l'évidence, pas été remis en cause dans le cadre du Traité bilatéral du 9 septembre 1991 également conclu en vue de favoriser l'exécution des sentences entre les deux Etats, [...] [L]'arrêt de la Cour de Cassation de Dubai du 15 mai 2004 ayant rendu définitive l'annulation de la sentence dans ce pays pour avoir entendu des témoins sans leur faire prêter serment, ne peut faire l'objet d'une reconnaissance en France, [...] [L]es décisions rendues à la suite d'une procédure d'annulation, à l'instar des décisions d'exequatur, ne produisent pas d'effets internationaux car elles ne concernent qu'une souveraineté déterminée sur le territoire où elle s'exerce, aucune appréciation ne pouvant être portée sur ces décisions émises par un juge étranger à l'occasion d'un procès indirect [...] [L]'existence d'un Traité d'entraide judiciaire entre les deux Etats étant ainsi indifférente en ce qui concerne l'arrêt du 15 mai 2004 dont n'a pas à connaître le juge de l'exequatur de la sentence" (decisión de 29 de septiembre de 2005, *Direction Générale de l'Aviation Civile de l'Emirat de Dubai (Emirats Arabes Unis) v. International Betchel Co. LLC (Panama)*, 1ère chambre, section C, RG N° 2004/07635).

#### TermoRio (2006)

Un litigio entre dos compañías colombianas sobre un contrato doméstico de compraventa de energía eléctrica fue resuelto por tres árbitros colombianos mediante un laudo CCI dictado en Colombia y anulado por el Consejo de Estado colombiano en atención a que el Derecho colombiano no permitía, a la sazón, sujetar un arbitraje doméstico a las reglas CCI.

El US District Court de Columbia denegó el reconocimiento del laudo, considerando que "[t]here are very few cases that address the question of whether a U.S. Court should enforce an arbitral award when a foreign court has nullified that same award. [...]. [T]his case involves a dispute involving columbian parties over a contract to perform services in Columbia which led to a columbian arbitration decision and columbian litigation. In consideration of these facts [...] plaintiffs cannot seek to enforce their arbitral award here unless the columbian courts' decisions violated U.S. public policy.

[...] For a foreign court's decisions to be contrary to U.S. public policy, it must be repugnant to fundamental notions of what is decent and just in the State where enforcement is sought. [...] [W]hile the public policy doctrine is not moribund, it is in fact rarely relied upon.[...] [P]laintiffs concede that they do not specifically allege that Columbian courts are corrupt.[...] On a legal basis, it takes much more than an allegation that a decision was results-oriented to demonstrate that it was 'repugnant', particularly when, as here, the decision seems plausible on the merits.[...] [E]ven that the Columbian court made a clear mistake is not sufficient to refuse to enforce it".

El District Court cuidó de razonar que su decisión no era contraria a *Chromalloy*: "The court's decision in *Chromalloy* is both questionable on the merits and distinguishable on the facts.[...] More generally, the instant case is factually distinguishable from *Chromalloy* on several grounds. First, there is no longer a U.S. party involved in this case, as there was in *Chromalloy*. The lack of a U.S. party diminishes the U.S. interest in applying U.S. law [...] Third, the *Chromalloy* court seemed to rely heavily on the fact that Egypt sought to repudiate its solemn promise to abide by the results of the arbitration, in breach of the contractual agreement that the arbitration decision shall be final and binding and cannot be made subject to any appeal or other recourse. Here, in contrast, the agreement did call for the arbitration to be "binding," but it did not expressly preclude judicial review, or say it was final" (decisión de 17 de marzo de 2006, *TermoRio S.A.E.S.P. and LeaseCo Group, LLC. v. Electrificadora del Atlántico S.A.E.S.P. (Electranta) et al*, 421 F. Supp. 2d 87 [2006]).

La decisión fue confirmada por la US Court of Appeals for the District of Columbia considerando que "the [New York] Convention provides a carefully crafted framework for the enforcement of international arbitral awards. Under the Convention, [o]nly a court in a country with primary jurisdiction over an arbitral award may annul that award [...] Pursuant to [New York Convention Article V(1)(e)] a secondary Contracting State normally may not enforce an arbitration award that has been lawfully set aside by a competent authority in the primary Contracting State. [...] the Consejo de Estado is undisputedly a competent authority in Colombia (the primary State) and [...] there is nothing in the record here indicating that the proceedings before the Consejo de Estado were tainted [...] For us to [confirm the award] would seriously undermine a principal precept of the New York Convention: an arbitration award does not exist to be enforced in other Contracting States if it has been lawfully set aside by a competent authority in the State in which the award was made. This principle controls the disposition of this case. [...] The Convention does not endorse a regime in which secondary States (in determining whether to enforce an award) routinely second-guess the judgment of a court in a primary State, when the court in the primary State has lawfully acted pursuant to competent authority to set aside an arbitration award made in its country. [...] [W]e must be very careful in weighing notions of public policy in determining whether to credit the judgment of a court in the primary State vacating an arbitration award. The test of public policy cannot

be simply whether the courts of a secondary State would set aside an arbitration award if the award has been made and enforcement has been sought within its jurisdiction. [...] A judgment is unenforceable as against public policy to the extent that it is repugnant to fundamental notions of what is decent and just in the State where the enforcement is sought [...] The standard is high, and infrequently met. As one Court wrote, '[o]nly in clear-cut cases ought it to avail defendant' [...] In the classic formulation, a judgment that tends clearly to undermine the public interest, the public confidence in the administration of the law, or security for individual rights or personal liberty or of private property is against public policy".

La Court of Appeals cuidó también de no entrar en contradicción con *Chromalloy* señalando que "as appellees point out, the present case is plainly distinguishable from *Chromalloy* where an express contract provision was violated by pursuing an appeal to vacate the award", lo que no se daba en el caso *TermoRio* (decisión de 25 de mayo de 2007, 487 F. 3d 928 [2007]).

#### Volker (2007)

En 2007 la Cour d'Appel de París confirmó una decisión de 7 de marzo de 2005 del Presidente del Tribunal de Grande Instance de París que reconoció un laudo CCI dictado en Bruselas el 23 de julio de 2004, posteriormente anulado por decisión de 16 de noviembre de 2005 del Tribunal de primera instancia de Bruselas. La Cour d'Appel de París reiteró que "l'article VII(1) de la Convention de New York du 10 juin 1958 encourage, dans un but d'efficacité, l'application du droit commun plus favorable à l'exécution des sentences que ne le sont ses propres dispositions, ce que est très exactement le cas du droit français dont l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile ignore l'annulation de la sentence dans l'Etat du siège arbitral comme motif de refus d'exequatur; qu'il est en effet un principe fondamental du droit français de l'inexécution des sentences rendues à l'étranger que l'annulation par le juge du siège ne porte pas atteinte à l'existence de la sentence en empêchant sa reconnaissance et son exécution dans d'autres ordres juridiques nationaux car l'arbitre ne fait pas partie intégrante de l'ordonnement juridique de l'Etat du siège, dans notre cas, celui de la Belgique; considérant que le juge ne pouvant refuser l'exequatur lorsque son droit national l'autorise, l'ordonnance attaquée est ainsi confirmée, aucun cas de refus de l'article 1502 n'étant satisfait" (decisión de 18 de enero de 2007 1ère chambre, section C, *S.A Lesbats et fils (France) v. Volker le Docteur C...* (Allemagne), RG n° 05/10887).

#### Oberlandesgericht de Dresde (2007)

En cambio, pocos días después, el Oberlandesgericht de Dresde (Alemania) negó el reconocimiento de un laudo dictado en Minsk en el marco de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Bielorusia, anulado por el Tribunal Supremo de Comercio (decisión de 19 de septiembre de 2005), considerando que "[e]l Tratado [Bilateral] de Comercio entre los Estados Unidos y Bielorrusia dedica una sección al arbitraje, lo que es indicativo de que el principio de 'nación más favorecida' es aplicable a aquellos

tratados que sean menos estrictos que el convenio de Nueva York respecto de los laudos arbitrales; [...] que los Estados Unidos y Bielorrusia sean estados contratantes del convenio de Nueva York no impide la aplicación del Convenio europeo [de arbitraje comercial internacional] [...]; los motivos por los que el Tribunal Supremo de Comercio ha anulado el laudo son motivos reconocidos como tales en el Convenio europeo [...] [E]l Tribunal Supremo de Comercio ha estimado que el tribunal arbitral infringió las reglas del procedimiento arbitral [...] ése es un motivo que existe también en derecho alemán" (decisión de 31 de enero de 2007, *US Supplier v. State Enterprise (Belarus)*, SchiedsWZ 2007, pp .327-330)

Venture Global (2008)

La competencia exorbitante de los tribunales de India en orden a la anulación del laudo extranjero, más arriba recordada (*Nirma*), volvió a ser afirmada en relación con un laudo dictado en Londres el 3 de abril de 2006 bajo los auspicios de la London Court of International Arbitration, que fue recurrido en anulación ante los tribunales de India. El Tribunal Supremo de India estableció que los tribunales de India tienen competencia en orden a la anulación del laudo dictado en el extranjero no habiendo las partes excluido esa competencia: "It is relevant to point out that in this proceeding, we are not deciding the merits of the claim of both parties, particularly, the stand taken in the suit filed by the appellant herein for setting aside the award. It is for the concerned court to decide the issue on merits and we are not expressing anything on the same. The present conclusion is only with regard to the main issue whether the aggrieved party is entitled to challenge the foreign award which was passed outside India in terms of [the India 1966 Arbitration and Conciliation Act]. [...] Several contentions have been raised on behalf of the appellant, namely, Part I of the Act only applies to arbitrations where the place of arbitration is in India and if the place of arbitration is not in India then Part II of the said Act would apply. [...] On the other hand, on behalf of respondent No.1, it was submitted that a conjoint reading of the provisions shows that Part I is to be applied to all arbitrations. It was further submitted that unless the parties by their agreement exclude its provisions, Part I would also apply to all international commercial arbitrations including those that take place out of India. [...] [I]t must be stated that the said Act does not appear to be a well-drafted legislation. [...] However in our view a proper and conjoint reading of all the provisions indicates that Part I is to apply also to international commercial arbitrations which take place out of India, unless the parties by agreement, express or implied, exclude it or any of its provisions" (decisión de 10 de enero de 2008, *Venture Global Engineering (USA) v. Salyam Computer Services Ltd (India) and Anr* [2008] 4 SCC 190).

Teekay (2008)

En 2008 el criterio anacional del sistema francés fue reafirmado por la Cour d'Appel de París para negarse a suspender su decisión sobre el reconocimiento -otorgado por decisión de 15 de marzo de 2006 del Presidente del Tribunal de Grande Instance- de un laudo dictado el 31

de octubre de 2005 en el marco de la OHADA (Organization for the Harmonization of Business Law in Africa) y recurrido en Abidjan ante los tribunales de Costa de Marfil. La Cour d'Appel de Paris afirmó que "quelle que soit la compétence de la Cour A'appel d'Abidjan pour connaître d'un recours dirigé contre une sentence rendue sous les auspices du règlement d'arbitrage de la CCJA [Cour Commune de Justice de l'Arbitrage] que, ainsi que le soulignent les intimés, prévoit la procédure et les conditions pour en contester la validité devant cette même Cour, la sentence internationale, qui n'est rattachée à aucun ordre juridique étatique, como celle rendue dans le contexte du Traité de l'OHADA, est une décision de justice internationale dont la régularité est examinée au regard des règles applicables dans le pays où sa reconnaissance et son exécution sont demandées, que l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile n'envisageant pas comme cause de refus d'exécution, l'annulation de la sentence à l'étranger, la décision à intervenir de la juridiction ivoirienne étant sans effet en France, la demanda de sursis à statuer est rejetée" (decisión de 31 de enero de 2008, *Société Ivoirienne de Rafinage v. Teekay Shipping Norway AS, Teekay Shipping Canada Ltd., Bona Shipholding Ltd et Standard Steamship Owner's Protection and Indemnity Association*, 1re Chambre, section C, RG n° 06/07787).

Yukos/Rosneft (Holanda 2009 - UK 2014)

De un tiempo a esta parte son constantes las referencias al asunto Yukos.

OJSC Yukos Oil Company (Yukos) fue una empresa estatal constituida en 1993 por determinación del gobierno de Boris Yeltsin (presidente de la Federación Rusa desde 1991 a 1999) a la que se transfirieron los bienes y actividades de una pluralidad de empresas estatales soviéticas del sector 'oil & gas', entre ellas las muy importantes Yuganskneftegaz, Kuybyshevneftorgsintez y Samaraneftgaz, amén de ocho empresas de distribución y otras dedicadas a actividades técnicas relacionadas. Como muchas otras empresas estatales, Yukos fue privatizada en 1995 mediante el 'loans-for-share scheme' adoptado por el gobierno de Yeltsin; así, Yukos pasó a manos de Menatep y Rosprom, empresas privadas dirigidas y/o controladas por M. Khodorkovsky. En 2003 Khodorkovsky, probablemente ya la persona más rica de Rusia y una de las más ricas del mundo, fue detenido (y en 2005 resultaría condenado en Rusia por fraude y delito fiscal) y las inspecciones fiscales de sus empresas llevaron en 2004 a la intervención de Yukos por el gobierno de Vladimir Putin (presidente de Rusia desde 2000), a la declaración de quiebra de Yukos, decretada en 2006 por la Moscow Commercial [Arbitrazh] Court, y a la liquidación de Yukos en 2007, volviendo de ese modo los activos de Yukos al Estado ruso para quedar integrados en el grupo de empresas de la estatal rusa Rosneft.

En medio de esas vicisitudes, el 19 de septiembre de 2006 se dictaron en Moscú (en el seno de la International Commercial Arbitration Court de la Cámara de Comercio e Industria de la Federación Rusa -ICAC-) cuatro laudos que condenaron a Rosneft a pagar a Yukos \$245M en razón de unos préstamos hechos por Yukos a Yuganskneftegaz cuando esta empresa formaba parte del grupo Yukos (antes de integrarse en Rosneft

como consecuencia de la liquidación de Yukos). Los cuatro laudos fueron anulados por la Moscow Commercial Court (decisiones de 18 y 23 de mayo de 2007) por infracción del derecho de defensa y de las reglas del procedimiento de arbitraje y por falta de independencia e imparcialidad de los árbitros; decisiones de anulación confirmadas por la Federal Commercial Court (13 de agosto de 2007) y la Supreme Commercial Court de la Federación Rusa (10 de diciembre de 2007).

Yukos solicitó el reconocimiento en Holanda de los laudos anulados, que fue denegado por el Presidente del Tribunal de Distrito de Amsterdam (28 de febrero de 2008) al amparo del art. V(1)(e) del Convenio de Nueva York, pero haciendo notar que, en circunstancias excepcionales (como por ejemplo, la infracción de los principios del 'due process' en el procedimiento de anulación, o la falta de imparcialidad o independencia del tribunal de anulación, o la manifiesta insuficiencia de motivación de la decisión de anulación), podría concederse el reconocimiento a un laudo anulado, circunstancias extraordinarias que, en este caso sin embargo, no habían quedado acreditadas.

Esa decisión fue revocada por la Corte de Apelación de Amsterdam, que reconoció los cuatro laudos, considerando que el Convenio de Nueva York no obliga a los tribunales holandeses a denegar el reconocimiento a los laudos anulados y que la anulación de los laudos tiene que cumplir con las exigencias elementales de un debido proceso, que no se daban aquí: "the Court of Appeal takes as its point of departure that the New York Convention 1958 pertains to the recognition and enforcement of arbitral decisions, but does not provide in the international recognition of decisions by civil courts to set aside or nullify arbitral awards. [...] [H]owever the degree to which the New York Convention of 1958 otherwise leaves scope for granting leave to enforce an arbitral award that has been set aside by a competent authority of the country where the award was granted, the Dutch Court is in any rate not compelled to refuse the leave to enforce a set aside arbitral award if the foreign judgment under which the arbitral award was set aside, cannot be recognised in the Netherlands. [...] Therefore the Court of Appeal will first follow general law to see whether the decisions of the Russian Civil [rectius, Commercial] Court to set aside the arbitral awards of 19 September 2006 can be recognised in the Netherlands. The starting point applied here is that a foreign judgment, regardless of its nature and purport, is recognised if a number of minimum requirements have been met, which include that the foreign judgment was brought about after due process of law. There is no due process of law if it must be assumed that the foreign judgment was passed by a judicial instance that is not impartial and independent. [...] [T]he Court of Appeal must assess whether the decision of the Russian Civil Court to set aside the arbitral awards can be recognised in the Netherlands, more in particular whether said judgments were rendered by a judicial instance that is impartial and independent". Y en vista de la prueba ante sí, la Corte concluyó que "it is in this way plausible that the judgments of the Russian Civil Court in which the arbitral awards were set aside were the result of a judicial process that must be qualified as partial and dependent, and that these judgments cannot be recognised in the Netherlands. This means that in the assessment

of the request by Yukos Capital to enforce the arbitral awards, the setting aside of these decisions by the Russian Court must be ignored" (decisión de 28 de abril de 2009, *Yukos Capital S.A.R.L (Luxembourg). v. OAO Rosneft (Russian Federation)*, Case No. 200.005.269/01, Stockholm Intl. Arb. Rev. 2009 No.1).

Esta decisión fue recurrida ante el Hoge Raad (Tribunal Supremo de Holanda) que sin entrar en el fondo declaró el recurso inadmisibles considerando que en el derecho holandés no cabe recurso contra la decisión de reconocimiento de un laudo comprendido en el ámbito de aplicación del Convenio de Nueva York, como era el caso (decisión de 25 de junio 2010). En vista de esa decisión, en diciembre de 2010 y al amparo del artículo 34 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, Rosneft presentó una reclamación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Reino de Holanda por violación del artículo 6 CEDH ('derecho a un proceso equitativo e igualdad de armas'); reclamación que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró inadmisibles por más que, a la sazón, estaba conociendo de una reclamación (application 5829/04) planteada en 2004 por M. Khodorkovsky contra la República Rusa, que sería resuelta poco después por sentencia de 31 de mayo de 2011 que declaró la violación por la República Rusa de los arts. 3, 5(1)(b), 5(1)(c), 5(3) y 5(4) del Convenio Europeo de Derechos Humanos en las detenciones y juicio de Khodorkovsky.

Puede ser de interés recordar que la existencia de las irregularidades que la Cour d'Appel de Amsterdam apreció en los procesos judiciales en Rusia y que llevaron a la declaración de nulidad de los cuatro laudos Yukos/Rosneft, se volvería a poner sobre la mesa, años después, cuando los tribunales holandeses tuvieron que pronunciarse sobre el reconocimiento en Holanda de la declaración de quiebra y orden de liquidación de Yukos. El Tribunal de Distrito de Amsterdam, considerando que el procedimiento de declaración de quiebra de Yukos no respetó tampoco las garantías de un debido proceso, negó el reconocimiento en cuanto contrario al orden público holandés (decisión de 31 de octubre de 2007). La Corte de Apelación de Amsterdam confirmó esa decisión atendiendo fundamentalmente - aunque no únicamente- a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictada con anterioridad (y confirmada en apelación el 16 de diciembre de 2014) que declaró que la declaración de quiebra y liquidación de Yukos infringió el art. 6 del Convenio Europeo de derechos Humanos, y concedió a los antiguos accionistas de Yukos una indemnización de €1,8 billion (de los €38 billion finalmente pretendidos -de los inicialmente reclamados US\$ 98 billion-). Pero a diferencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte de Apelación de Amsterdam apreció además la existencia de una serie de irregularidades en las actuaciones de la inspección fiscal que, indubitadamente a su juicio, solo podían explicarse desde una voluntad deliberada encaminada a producir la quiebra de Yukos: "the approach chosen by the authorities leaves no room for another conclusion than that they chose not to come to an orderly and legitimate levy and collection of the taxes that were due and payable, but instead chose to put Yukos in a situation where it could no longer pay its debt and would ultimately end up bankrupt... As result, given the way the bankruptcy order has come into existence, recognition of such order whereby legal effects would be attributed

to it in The Netherlands, is contrary to Dutch public order" (decisión de la Corte de Apelación de Amsterdam de 9 de mayo de 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1495). El Tribunal Supremo holandés ha confirmado esas dos decisiones de instancia (decisión de 18 de enero de 2019).

Sin embargo, no habrá de verse en lo anterior una predisposición de los tribunales holandeses contra la Federación Rusa -o sus tribunales-: varios tribunales arbitrales se han pronunciado en parecida línea crítica. Así por ejemplo, al amparo del tratado bilateral de protección de inversiones entre la Federación Rusa y el Reino Unido, se dictó en 2010, en Estocolmo (en el marco del Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, SCC), el laudo *RosInvest* (SCC arbitration V 079/2005) que condenó a Rusia a pagar US\$ 3,5M a unos antiguos accionistas minoritarios de Yukos (*RosInvest Co UK Ltd*), considerando que las medidas adoptadas por Rusia constituyeron una "unlawful expropriation" en cuanto el efecto perseguido era "destroy Yukos and gain control over its assets"; como por ejemplo también, al amparo del tratado bilateral de protección de inversiones entre la Federación Rusa y España, se dictó en 2012, asimismo en Estocolmo y en el seno de la SCC, el laudo *Quasar* (SCC Case No. 24/2007) que condenó a Rusia a pagar US\$ 2M a otros antiguos accionistas minoritarios de Yukos (*Quasar de Valores SICAV S.A.*), considerando del mismo modo que Rusia utilizó ilegítimamente la inspección fiscal de Yukos para quebrarla y nacionalizar sus bienes (laudo no obstante anulado por los tribunales suecos por entender que los árbitros carecían de jurisdicción sobre la disputa al amparo del tratado de protección de inversiones: decisión de 18 de enero de 2016 de la Svea Court of Appeal<sup>4</sup>, revocando la de 11 de septiembre de 2014 del District Court de Estocolmo, que confirmó el laudo<sup>5</sup>).

Pero no solo los tribunales arbitrales y los tribunales holandeses han tomado en consideración, en sus decisiones, la ingerencia del Estado ruso sobre los procesos judiciales y/o administrativos en Rusia: así también un juez inglés de The Bow Street Magistrates Court (decisión de 18 de marzo de 2005), el más alto tribunal administrativo de Lituania (decisión de 16 de octubre de 2006), el Tribunal Federal suizo (decisión de 13 de agosto de 2007), otro juez inglés de la City of Westminster Magistrate's Court (decisión de 19 de diciembre de 2007) y la UK High Court of Justice -Bench Division Commercial Court- (decisión de 3 de julio de 2008), han señalado y tenido en cuenta la ingerencia del Estado ruso sobre los procesos judiciales y administrativos que afectan a sus intereses estratégicos (decisiones todas referidas en la decisión de 28 de abril de 2009 de la Corte de Apelación de Amsterdam, *Yukos Capital S.A.R.L (Luxembourg). v. OAO Rosneft (Russian Federation)*, Case No. 200.005.269/01, citada).

Por tanto, ninguna especial predisposición de los tribunales holandeses contra la Federación Rusa o sus tribunales habrá de verse en la decisión *Yukos/Rosneft*, habida cuenta además que, en 2016, el Tribunal de Distrito de La Haya declaró la nulidad de los que han venido -un tanto equívocamente- a conocerse como 'laudos Yukos', seis

---

<sup>4</sup> [http://www.italaw.com/sites/default/\\_les/case-documents/italaw7063.pdf](http://www.italaw.com/sites/default/_les/case-documents/italaw7063.pdf)

<sup>5</sup> [http://www.italaw.com/sites/default/\\_les/case-documents/italaw3317\\_0.pdf](http://www.italaw.com/sites/default/_les/case-documents/italaw3317_0.pdf)

laudos (tres laudos preliminares de 30 de noviembre de 2009 y los tres laudos finales de 18 de julio de 2014) dictados en La Haya en el marco de la Permanent Court of Arbitration, favorables a los accionistas de Yukos y que condenaron a Rusia al pago de una 'record breaking' indemnización de \$50 billion, en razón de haber estimado los árbitros que Rusia había infringido los artículos 10 ('fair and equitable treatment of investors') y 13 ('wrongful expropriation') del Tratado de la Carta de la Energía (ECT) por cuanto Rusia "was not driven by motives of tax collection" al ordenar la liquidación de Yukos, sino "by the desire of the state to acquire Yukos' most valuable assets".

El Tribunal de Distrito de La Haya anuló los seis laudos considerando que los árbitros carecían de jurisdicción bajo el ECT por cuanto que, aunque Rusia había firmado el tratado, no lo había ratificado; que según el artículo 45 ECT, los estados signatarios del ETC solo habían consentido una aplicación provisional del tratado, hasta su entrada en vigor, "to the extent that such provisional application is not inconsistent with its constitution, laws or regulations"; y que el acuerdo de arbitraje (art. 26 ECT) resultaba *inconsistent* con el derecho ruso en cuanto éste limita el arbitraje a las disputas privadas y no lo admite para las surgidas de las relaciones legales, de naturaleza predominantemente pública, entre inversionista extranjero y Rusia" (decisión de 20 de abril de 2016, *Russian Federation v Veteran Petroleum Ltd (Cyprus), Yukos Universal Limited (Isle of Man) and Hulley Enterprises Ltd (Cyprus)*, ECLI:NL:RBDHA:2016:4230).

No consta que los 'laudos Yukos' anulados hayan sido reconocidos en alguna jurisdicción. Consta sin embargo que antes de la anulación se solicitó su reconocimiento y ejecución en Bélgica, Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, procedimientos que han seguido vicisitudes diversas, cuyo detalle sin embargo no interesa aquí. En Francia, por ejemplo, los laudos fueron reconocidos por decisión de 1 de diciembre de 2014 del Presidente del Tribunal de Grande Instance de París; pero la entrada en vigor de la conocida como Ley Sapin II (Loi n° 2016-1691, de 9 de diciembre de 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique", IORF n° 0287 de 10 décembre 2016), inspirada en la US Foreign Corrupt Practices Act y la UK Bribery Act, vino a dificultar de tal modo la ejecución contra bienes de estados extranjeros (en este caso, la Federación Rusa) que el 19 de octubre de 2017 los accionistas de Yukos anunciaron su decisión de abandonar la ejecución de los laudos en Francia.

Por lo demás, la decisión del Tribunal de Distrito de La Haya fue apelada, apelación en la que han recaído ya varias resoluciones 'interimarias' de la Corte de Apelación de La Haya -en septiembre de 2015 y 25 de septiembre de 2018 (ésta *Hulley and others v Russian Federation*, ECLI:NL:GHDHA: 2018: 2476)-, siendo que la audiencia de apelación estaba anunciada para la última semana de septiembre 2019. Contra la decisión que dicte la Corte de Apelación de La Haya cabe recurso ante el Hoge Raad.

Dejando aquí los 'laudos Yukos' hemos todavía de volver al asunto *Yukos/Rosneft* porque éste mereció también la consideración de los tribunales británicos. Omitiendo decisiones que aquí pueden ser obviadas, basta recordar que la High Court of Justice fue llamada a resolver (como decisión previa) la cuestión -preliminar- de si la anulación de un laudo constituye -o no- en derecho inglés una circunstancia impeditiva de su reconocimiento; cuestión que la High Court resolvió en el sentido de que "the Court has power to enforce the awards at common law notwithstanding the set-aside decisions of the Russian Courts". Para la High Court lo que había de resolverse era "whether the Court in considering whether to give effect to an award can (in particular and identifiable circumstances) treat it as having legal effect notwithstanding a later order of a court annulling the award"; sobre lo que la High Court estableció: "In applying this test it would be both unsatisfactory and contrary to principle if the Court were bound to recognise a decision of a foreign court which offended against basic principles of honesty, natural justice and domestic concepts of public policy [...] [C]onsiderable body of academic opinion disagrees with the view expressed by Professor Van den Berg that decisions to set aside awards must be recognised (in the words of Professor Born, in 'International Commercial Arbitration', 2nd edn at §924, 'irrespective of the procedures or integrity of the annulment proceedings'. [...] [A] defendant's ability to rely on a foreign decision setting aside an award would depend upon whether it would be recognised in accordance with ordinary principles applying to the recognition of foreign judgements [...] [N]o effect should be given to the decisions of the Russian Courts, based on conventional English conflict of law principles, for example on the basis that the judgement were obtained by fraud [...] or [...] in breach of the rules of natural justice or that enforcement would be contrary to public policy. That analysis was suggested in Dicey, Morris and Collins on the Conflict of Laws 15th edn (London: Sweet & Maxwell 2012) Rule 66, in the context of the New York Convention, and it accorded with decided cases, *Dallah Real Estate & Tourism Holding Co v Pakistan* (2010 UKSC 46) and [...]" (decisión de 3 de julio de 2014, *Yukos Capital S.A.R.L. (Luxembourg) v OJSC Oil Company Rosneft (Russian Federation)*, [2014] EWHC 2188 Comm).

Al citado asunto *Dallah* nos referimos a continuación.

*Dallah* (2010)

En relación con un laudo CCI dictado en París el 23 de junio de 2006, la Supreme Court de Reino Unido, llamada a juzgar sobre la extensión del acuerdo de arbitraje a una de las partes -cuestión que terminó resolviendo en el sentido de que no existía para ello acuerdo de arbitraje válido según la ley francesa-, anticipó la incidencia que podría tener "the court's sense of justice" a la hora de resolver sobre el reconocimiento de los laudos extranjeros, considerando que "[t]he court before which recognition or enforcement is sought has a discretion to recognise or enforce even if the party resisting recognition or enforcement has proved that there was no valid arbitration agreement. This is apparent from the difference in wording between the Geneva Convention on the Execution of Foreign

Arbitral Awards 1927 and the New York Convention. The Geneva Convention provided (article 1) that, to obtain recognition or enforcement, it was necessary that the award had been made in pursuance of a submission to arbitration which was valid under the law applicable thereto, and contained (article 2) mandatory grounds ("shall be refused") for refusal of recognition and enforcement, including the ground that it contained decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration. Article V(1)(a) of the New York Convention provides: "Recognition and enforcement of the award may be refused ..." [...] There may, of course, in theory be cases where the English court would refuse to apply a foreign law which makes the arbitration agreement invalid where the foreign law outrages its sense of justice or decency, for example where it is discriminatory or arbitrary. The application of public policy in the New York Convention (article V(2)(b)) is limited to the non-recognition or enforcement of foreign awards. But the combination of (a) the use of public policy to refuse to recognise the application of the foreign law and (b) the discretion to recognise or enforce an award even if the arbitration agreement is invalid under the applicable law, could be used to avoid the application of a foreign law which is contrary to the court's sense of justice" (decisión de 3 de noviembre de 2010 (*Dallah Estate and Tourism Holding Company v. The Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan*, [2010] UKSC 46),

Importa añadir que, contrariamente al parecer de la Supreme Court de Reino Unido, los tribunales franceses declararon posteriormente que la extensión a una de las partes del acuerdo de arbitraje era en el caso perfectamente válida según la ley francesa: "le Gouvernement du Pakistan, Ministère des Affaires Religieuses ... s'est comporté comme la véritable partie pakistanaise lors de l'opération économique; [...] en conséquence, le moyen pris de ce que le tribunal arbitral a étendue à tort la clause d'arbitrage au Gouvernement du Pakistan, Ministère d'Affaires religieuses et s'est déclaré compétent, est infondé" (decisión de la Cour d'Appel de París de 17 de febrero de 2011, Pôle 1, Chambre 1, RG n° 09/28533).

#### Mossack (2010)

Un laudo dictado en Panamá el 10 de febrero de 2010 en el marco del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá fue reconocido por decisión de 16 de marzo de 2010 del Tribunal d'arrondissement de Luxemburgo. Tres días después el laudo fue recurrido en anulación ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá. La decisión de reconocimiento fue recurrida y, pendiente el recurso de anulación, el propio el Tribunal d'arrondissement de Luxemburgo, siguiendo el criterio expresado por la Cour d'Appel de Luxemburgo en *Sovereign* y por la Cour de Cassation de Francia en *Putrabali*, resolvió que el laudo podía ser reconocido en Luxemburgo cualquiera que fuera el resultado del recurso de anulación (decisión de 5 de mayo de 2010 (No. 653/100, *Mossack Fonseca & Co (Luxembourg) S.a.r.l. v Mossfon (Luxembourg) S.a.r.l.*, no publicada, citada por Wietzorek. M., en 37 ASA Bulletin 2/2019, p.325).

Thai-Lao (USA 2011 - UK 2012 - Francia 2013)

La High Court de Kuala Lumpur (decisión de 15 abril 2011) desestimó un recurso contra un laudo dictado en Kuala Lumpur el 4 de noviembre de 2009. Esa decisión fue anulada por la Malaysian Court of Appeal (decisión de 26 de julio de 2011), que reenvió el caso a la High Court que, ésta vez, anuló el laudo (decisión de 28 de diciembre de 2012).

Pendiente la anulación del laudo de la segunda decisión de la High Court de Kuala Lumpur el laudo fue reconocido en los Estados Unidos por el US District Court (Second District) de Nueva York, considerando que "[p]etitioners have filed a petition to confirm the award pursuant to the [New York] Convention. Respondent opposes the petition on the ground that the panel exceeded its jurisdiction... beyond the scope of the arbitration agreement, by extending their jurisdiction to other agreement and to parties that are not signatories to the PDA [el contrato que contenía el acuerdo de arbitraje]. [...] [T]he Court holds that summary confirmation of the award is warranted under the Convention [...] The Court concludes that it should defer to the panel's conclusions on these issues" (decisión de 3 de agosto de 2011, 10 Civ. 5256, 2011 WL 3516154). El reconocimiento fue confirmado en apelación por la US Court of Appeals (Second Circuit) considerando que "although the [New York] Convention recognizes that an award may not be enforced where predicated on a subject matter outside the arbitrator's jurisdiction, it does not sanction second guessing the arbitrator's construction of the parties agreement [...] [H]ere Laos seek to undo the arbitral panel's contract interpretation of the PDA, which lies beyond the scope of our review" (decisión de 13 de julio de 2012, No. 11-3536-cv, 2012 WL 2866275).

Sin embargo, una vez que el laudo fue anulado en Kuala Lumpur, el District Court de Nueva York reconsideró su anterior decisión y denegó el reconocimiento considerando que "a secondary Contracting State [of the New York Convention] normally may not enforce an arbitration award that has been lawfully set aside by a competent authority in the primary Contracting State. [...] The use of the permissive 'may' in Article (V) (1) (e) of the New York Convention gives this Court discretion to enforce a foreign arbitral award where the award has been nullified by the High court in the state with primary jurisdiction over the award. That discretion, however, is narrowly confined. [...] That discretion may be exercised only when the foreign judgment setting aside the award is repugnant to fundamental notions of what is decent and just in the State where enforcement is sought or violates basic notions of justice. This standard is high and infrequently met and should be found only in clearcut cases. [...] Petitioners fail to demonstrate that the circumstances of this case meet the extraordinary circumstances envisioned by TermoRio [...] [T]he alleged errors Petitioners point out in the proceedings before the Malaysian courts and in the judgments of those courts do not rise to the level of violating basic notions of justice such that the Court here should ignore comity considerations and disregard the Malaysian judgments. [...] Because the Court finds that the process before the Malaysian courts and the

judgments of those courts did not violate basic notions of justice, the Court GRANTS Respondent's motion to vacate" (decisión de 6 de febrero de 2014, *Thai-Lao Lignite (Thailand) Co. Ltd & Hongsa Lignite (Lao Pdr) Co. Ltd v. Government of the Lao People's Democratic Republic*, 997 F.Supp.2d 214 [2014]). Lo que fue confirmado por la Court of Appeals (Secons Circuit) mediante decisión de 20 de julio de 2017 (864 F.3d 172 [2017]).

Pendiente el recurso de anulación contra el laudo, se solicitó en Inglaterra el reconocimiento del laudo; y la High Court of Justice decidió aplazar su decisión hasta que se resolviera el recurso. El juez razonó su decisión como sigue: "[I]t seems to me that this award is to be regarded as manifestly valid [...] Of course, I am not deciding now, finally, that it is valid. As I have said, there are pending proceedings in the Malaysian court, which is the supervisory court where the arbitration took place and, ultimately, whether or not this award is valid or not is a matter for that court, not for this court. [...] The question then arises, what is the proper approach of this court in circumstances where it comes to the conclusion the award is manifestly valid but there are pending proceedings challenging the award in another jurisdiction, that is the supervisory jurisdiction? [...] [T]he two main options open to the court are either an order for immediate enforcement or else an order for substantial security [...] There are strong grounds for making such an order [for immediate enforcement]. [...] However, it seems to me here that that would not be an appropriate order in the particular circumstances of the present case. That is so for two main reasons: [...] [C]laimants here have delayed for a very long period in seeking an order for immediate enforcement [...] Given that delay it seems to me that it would not be appropriate to grant an immediate order for enforcement. But putting that on one side, and even if I were wrong on that, it seems to me important, as I have just said, that there is a hearing due to take place in Malaysia within a matter of six weeks or so where the parties will appear before the Malaysian courts and the court will have to determine the issues" (decisión de 26 de octubre de 2012, *Thai-Lao Lignite & Hongsa Lignite v. Gov. of the Lao People's Democratic Republic*, [2012] EWHC 3381 [Comm]). Comoquiera que la High Court ordenó prestar garantía para asegurar, en su caso, la ejecución del laudo, que no fue prestada, pocos días después la High Court reconoció el laudo (decisión de 19 de noviembre de 2012).

En Francia el laudo fue reconocido (decisión de 20 de julio de 2010 del Presidente del Tribunal de Gran Instancia de Paris) estando pendiente de recurso de anulación; pero una vez anulado el laudo, la Cour d'Appel de Paris revocó la decisión de instancia y denegó el reconocimiento, no desde luego en razón de la anulación del laudo sino "[c]onsidérant que l'annulation d'une sentence étrangère par les juridictions de l'Etat dans lequel elle a été rendue n'est pas un cas de refus de reconnaissance en France. [...] Considérant que le juge de l'exequatur contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier l'existence de la convention d'arbitrage; [...] Considérant qu'en se prononçant sur l'indemnisation de préjudices consécutifs à des contrats distincts du PDA, qui

comportaient leurs propres clauses de règlement des litiges, et qui subsistaient postérieurement à la conclusion du PDA, les arbitres ont statué pour partie sans convention d'arbitrage" (decisión de 19 de febrero de 2013, *Republique Democratique Populaire du Lao v. Société Thai-Lao Lignite (Lao Pdr) Co. Ltd*, Pôle 1 Ch. 1, RG 12/09983).

Maximov (Holanda 2011- Francia 2014 - UK 2017)

En el marco de la Corte de Arbitraje Comercial Internacional de la Cámara de Comercio e Industria de la Federación Rusa -ICAC- se dictó en Moscú un laudo posteriormente anulado por la Moscow Commercial Court (en junio de 2011), anulación confirmada por la Federal Commercial Court (decisión de 10 de octubre de 2011). La apelación de esta decisión no fue autorizada por la Supreme Commercial Court de la Federación Rusa (decisión de 20 de enero de 2012).

El District Court de Amsterdam denegó el reconocimiento del laudo considerando que "the starting point is thus that the arbitral award has been annulled by the [Federal] Arbitrazh [Commercial] Court in Moscow (the 'competent authority'), and consequently no longer exists. In principle, this decision (upheld by the Federal Arbitrazh Court in Moscow) must be respected [...] [L]eave for the enforcement of an arbitral award that has been annulled by the competent authority can be granted only under exceptional circumstances, because only then can the (in and of itself undesirable) consequence be accepted that an annulled arbitral award does not have the same status in all countries. [...] There is room elsewhere in the Convention for the exequatur court in the country where the enforcement is sought to carry out a review on the basis of its own national public policy (see for example Art. V(2)(b) Convention). [...] All of this means that the court shall deny the operation of the ruling of the Arbitrazh Court in Moscow that annulled the arbitral award (and was upheld on appeal) only if (insofar as relevant here) the enforcement of the ruling annulling the arbitral award would violate Dutch public policy, for example because the annulment ruling was rendered in proceedings in which by Dutch standards the principles of proper judicial procedure were unacceptably disregarded. In the present case it does not appear in a sufficient manner that such exceptional circumstances exist". (decisión de 17 de noviembre de 2011, *Nikolai Viktorovich Maximov v. OJSC Novolipetsky Metallurgicheskoe Kombinat*, 491569/KG RK 11-1722, en <http://zoeken.rechtspraak.nl>).

En apelación, la Court of Appeals de Amsterdam ordenó a las partes que presentaran evidencia independiente sobre el derecho ruso en vista que las pruebas puestas sobre la mesa "are insufficient to justify the conclusion that the Russian State, or interests of the Russian State, has or have affected the course of justice in the proceedings to have the arbitral award in question quashed, with the consequence that it can no longer be said that the trial was fair", y luego de considerar que el reconocimiento de un laudo anulado debe ser denegado salvo que la anulación haya sido consecuencia de un *unfair trial* y que la existencia de un *unfair trial* solo puede tenerse establecida cuando existen "*sufficiently specific indications*" (decisión de 18 de septiembre de 2012, *Nikolai*

*Viktorovich Maximov v. OJSC Novolipetsky Metallurgicheske Kombinat*, Third Civil División case number 200.100.508/01).

Ulteriormente, en vista de la evidencia científica sobre el derecho ruso que le fue presentada, la Court of Appeals denegó el reconocimiento (decisión de 27 de septiembre de 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3911), decisión que fue confirmada por el Hoge Raad (decisión de 24 de noviembre de 2017 [ECLI:NL:HR:2017:2992]).

Vino a resultar así que los tribunales holandeses aplicando al caso concreto un mismo criterio legal concedieron el reconocimiento en un caso (*Yukos/Rosneft*) y denegaron el reconocimiento en otro caso (*Maximov*).

Los tribunales franceses tuvieron también oportunidad de conocer del asunto *Maximov*. El laudo fue reconocido en Francia por decisión del Tribunal de Grande Instance de París de 16 de mayo de 2012, que fue ratificada por la Cour d'Appel de París "considérant que le droit français de l'arbitrage international ne prévoit pas l'annulation de la sentence dans son pays comme cause de refus de reconnaissance et d'exécution de la sentence rendue à l'étranger" (decisión de 1 de abril de 2014, Pole 1 Chambre 1 n° 12/15479], y posteriormente por la Cour de Cassation (decisión de 25 de mayo de 2016, Chambre Civile 1, N° 14-20532).

Los tribunales británicos también conocieron del asunto *Maximov*, denegando la High Court of Justice el reconocimiento del laudo. En su decisión el Juez Burton llamó la atención sobre la extraordinaria dificultad de la prueba necesaria para poder separarse de la decisión de anulación del laudo: "My own view would be that an English court should not simply accept that a foreign court had set aside an arbitration award, particularly one within its own jurisdiction, if there were at the least an arguable case that the award had been set aside in breach of natural justice. [...] [T]he submissions and the evidence have revolved around the central question of recognition of the Moscow court judgments [...] The claimant's challenge to the Russian court judgment is, as set out in paragraph 2 above, based upon a case of bias [...] There has not been a great deal of dispute between the parties as to the proper test for me to apply, on any basis a high hurdle for the claimant to surmount, before refusing to recognise the judgment (upheld on appeal) which set aside the award. [...] [I]t is not suggested that the Russian judges were in such a position that their partiality should be presumed because of some personal interest or involvement. The case is one in which the claimant must establish actual bias, but that bias can be established by inference, hence inferred bias [...] There was no evidence in the case of actual bias, but I am asked to infer bias from the perverse nature of the Russian court's conclusions (and in certain respects the manner in which they were arrived at). Effectively the test is whether the Russian courts' decisions were so extreme and incorrect as not to be open to a Russian court acting in good faith [...] The claimant bears a heavy burden to establish not only that a foreign court's decisions were wrong or manifestly wrong but that they are so perverse as for it to be concluded that they could not have been arrived at in good faith or otherwise than by bias"; para concluire

que "I am unpersuaded that these decisions are so extreme and perverse that they can only be ascribed to bias against the claimant" (decisión de 27 de julio de 2017, Queens Bench, Commercial Court (2017) EWHC 1911 Comm).

BALCO (2012) / Reliance (2013)

La doctrina ha criticado la competencia exorbitante de los tribunales de India en orden a la anulación del laudo extranjero (expresada en *Nirma y Venture Global*). Y entendiendo que sus tribunales "have interpreted the provisions of the Act [the 1966 Arbitration and Conciliation Act] in such a way which defeats the main object of [the] legislation", el Gobierno de India promovió en 2010 un "consultation paper"<sup>6</sup> para intentar corregir (*inter alia*) aquella competencia extraterritorial. En línea con ese mismo propósito el Tribunal Supremo de India no tardó en establecer que su anterior doctrina no era de aplicación a laudos resultantes de acuerdos de arbitraje celebrados a partir de 6 de septiembre de 2012 (decisión de 6 de septiembre de 2012, *Bharat Aluminium Co. (BALCO) v. Kaiser Aluminium Technical Services Inc*, [2012] 9 SCC 552); y poco después la High Court de Delhi estableció que, en relación con los acuerdos de arbitraje anteriores a 6 de septiembre de 2012, se entendería que existía acuerdo de las partes contrario a la aplicación de la ley india de arbitraje, si India no era la sede del arbitraje o si la ley india no era la ley aplicable al acuerdo de arbitraje (decisión de 22 de marzo de 2013, *Union of India v. Reliance Industries Limited*, O.M.P No. 46 of 2013).

Sin embargo, el camino abierto por estas decisiones ha sufrido posteriormente un retroceso, como referimos más adelante (*Hardy*).

Castillo Bozo (2013)

El 21 de noviembre de 2012 se solicitó ante los tribunales norteamericanos la ejecución de un laudo dictado en Miami, Florida, el 13 de noviembre; el 10 de diciembre el laudo fue recurrido en anulación ante los tribunales de Venezuela y efectivamente anulado por decisión de 22 de abril 2013 del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en sede Constitucional (Decisión n° 13.006-DEF(AMP)-CONS, expte AP71-O- 2012-000042).

El US District Court Southern District of Florida no atribuyó sin embargo ningún efecto a esa anulación del laudo, considerando que "[u]nder [art. 5(1)(e) of] the [Inter-American] Convention [on International Commercial Arbitration], an arbitral decision may not be recognized if the decision has been annulled or suspended by a competent authority of the State in which, or according to the law of which, the decision has been made. Respondents argue that the Venezuelan annulment order is a decision of a competent authority within the meaning of 5(1)(e). [...] Article V of the New York Convention and Article 5 of the Inter-American Convention are generally understood to have the same meaning. Moreover, as stated

---

<sup>6</sup> <http://www.globalarbitrationreview.com/journal/article/28916/india-gateway/>

above, courts are expected to achieve a general uniformity of results under the two conventions. For these reasons, the Court will interpret Article 5(1)(e) as other courts have interpreted Article V(1)(e) of the New York Convention. The phrase 'under the law of which' in the New York Convention has been interpreted as a reference to the procedural law governing the arbitration, not the substantive law governing the underlying agreement. Where an arbitration agreement specifies the place of arbitration, this creates a presumption that the procedural law of that place applies to the arbitration. This strong presumption can only be overcome by an express designation of another country's procedural law [...] Respondents have not addressed the strong presumption that the applicable procedural law is the law of the arbitration site where, as here, the arbitration agreement specifies the place of arbitration. [...] Because Venezuela is not a country 'under the law of which' the arbitration award was made, the Venezuelan court does not qualify as a 'competent authority' under the Convention [...] To defer to the Venezuelan court in the name of comity in these circumstances would be, in effect, a rebuke of the United States' obligations under the Inter-American Convention. Moreover, such a decision would run counter to the emphatic federal policy in favor of arbitral dispute resolution that applies with special force in the field of international commerce" (decisión de 23 de mayo de 2013, *Juan José Castillo Bozo (Venezuela) v. Leopoldo Castillo Bozo (Venezuela) and Gabriel Castillo Bozo (Venezuela)*, 1:12-cv-24174-KMW),

COMMISA (USA 2013 - Luxemburgo 2017)

Un laudo CCI dictado en la ciudad de México el 16 de diciembre de 2009 fue recurrido en anulación ante los tribunales mexicanos, anulación que fue denegada en primera instancia (decisión de 25 de junio de 2010). El laudo fue reconocido en los Estados Unidos por decisión del US District Court (Southern District) de Nueva York (agosto 2010), que fue apelada. El laudo fue declarado nulo por decisión de 25 de agosto de 2011 del Tribunal Colegiado de Circuito n° 11 de México y, como consecuencia de ello, la US Court of Appeals (Second Circuit) remitió el caso al District Court de Nueva York para que se pronunciara de nuevo sobre el reconocimiento del laudo en vista, ahora, de su anulación.

El District Court reiteró el reconocimiento del laudo no obstante su anulación, considerando que "[i]nternational law favors arbitration and generally facilitates the enforceability of arbitrators' awards. However, national sovereignty runs strong and sometimes results in judicial interventions, and even nullifications, of arbitration proceedings and awards. If that occurs, the courts of the nation in which the prevailing party seeks to enforce the award in its favor may be presented with a dilemma: to enforce the arbitration award, or to defer to the judgment nullifying the award? [...] In *TermoRio*, the D.C. Circuit gave a more substantive definition of the enforcing court's discretion: if the judgment of nullification is repugnant to fundamental notions of what is decent and just in the United States or, stated another way, if the judgment violated any basic notions of justice in which we subscribe, then it need not be followed. I find that under the standard announced in *TermoRio*, the decision vacating

the award violated basic notions of justice, and that deference is therefore not required. [...] [R]etroactive application of laws and the unfairness associated with such application is at the center of the dispute before me; [...] Applying a law that came into effect well after the parties entered into their contract was troubling. [...] COMMISA reasonably believed that it was entitled to arbitrate the case, and the Eleventh Collegiate Court's decision disrupted this reasonable expectation by applying a law and policy that were not in existence at the time of the parties' contract. [...] But this unfairness was exacerbated by the fact that the Eleventh Collegiate Court's decision left COMMISA without a remedy to litigate the merits of the dispute that the arbitrators had resolved in COMMISA's favor. [...] The decision therefore violated basic notions of justice and I hold that the award in favor of COMMISA should be confirmed" (decisión de 27 de agosto de 2013, *Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral, S. de R.L. de C.V. (COMMISA) (México) v. Pemex Exploración y Producción (PEMEX) (México)*, 962 F. Supp.2d 642 [2013]).

Esta decisión que fue confirmada por la Court of Appeals (Second Circuit) considerando que "this case requires us to reconcile two settled principles that militate in favor of opposite results: a district court's discretion to confirm an arbitral award, and the comity owed to a foreign court's ruling on the validity of an arbitral award rendered in that country, here, Mexico. [...] Two developments in Mexican law transpired while arbitration proceedings were ongoing. In December 2007, the Mexican Congress changed the available forum for claims that (like COMMISA's) raise issues related to public contracts, and vested exclusive jurisdiction for such disputes in the Tax and Administrative Court. Not incidentally, the switch curtailed the applicable statute of limitations: previously, ten years ...; afterward, for suits in the Tax and Administrative Court, 45 days. Second, in May 2009, the Mexican Congress enacted Section 98 of the Law of Public Works and Related Services ("Section 98"), which ended arbitration for certain claims (such as those by COMMISA) [...] In September 2011, the Eleventh Collegiate Court held that P[emex]'s rescission [of the contract] was not arbitrable and ordered that the award be annulled; its analysis repeatedly referenced the newly-enacted Section 98. [...] The Eleventh Collegiate Court in Mexico set aside the arbitral award on the ground that P[emex], as an entity deemed part of the Mexican government, could not be forced to arbitrate. [...] [The Southern District decline[d] to defer to the Eleventh Collegiate Court's ruling, and again confirm[ed] the Award on the ground that annulment of the award violated basic notions of justice in that it applied a law that was not in existence at the time the parties contract was formed and left COMMISA without an apparent ability to litigate its claims. Id. Specifically, the Southern District concluded that the Eleventh Collegiate Court applied Section 98 retroactively to favor a state enterprise over a private party, and that COMMISA would be left without a remedy for its claims given the compressed statute of limitations for actions instituted in the Tax and Administrative Court. [...] We hold that the Southern District properly exercised its discretion in confirming the award because giving effect to the subsequent nullification of the award in Mexico would run counter to

United States public policy and would (in the operative phrasing) be 'repugnant to fundamental notions of what is decent and just' in this country" (decisión de 2 de agosto de 2016, 832 F.3d 92 [2016]).

El asunto COMMISA también se planteó ante los tribunales de Luxemburgo, con distinta suerte contrariamente a lo previsible. El laudo fue reconocido por decisión de 22 de marzo de 2013 del Tribunal d'Arrondissement de Luxemburgo, pero la decisión fue revocada por la Cour d'Appel que, abandonando su anterior criterio -expresado en *Sovereign y Mossack-*, denegó el reconocimiento considerando que "[d]ès que l'exequatur d'une sentence arbitrale est régi par la Convention de New York, les règles spécifiques de droit luxembourgeois ne jouent pas. [...] la Cour retient que l'article 1231 du nouveau Code de procédure civile énonce les motifs de refus de l'exequatur. Ces motifs sont indiqués avec la précision que '*sous réserve des dispositions de conventions internationales...*' le juge refuse l'exequatur des sentences arbitrales étrangères dans les conditions énoncées. L'article 1251 du nouveau Code de procédure civile est à interpréter en ce sens qu'en cas d'application de la Convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution de sentences arbitrales étrangères, les dispositions de l'article 1251 ne s'appliquent pas et que le juge ne tient compte que des dispositions de la Convention. [...] La Convention ancre la sentence arbitrale dans le pays dans lequel, ou après la loi duquel, elle a été rendue. Elle reconnaît à une autorité compétente de ce pays le pouvoir d'annuler ou suspendre la sentence [...] Au cas où la sentence n'est pas encore obligatoire pour les parties, a été annulée ou suspendue par l'autorité du pays d'origine, donc dans des hypothèses où la sentence ne produit pas d'effet -n'est pas exécutoire- dans son pays d'origine, le refus de la reconnaissance et de l'exécution de cette sentence sans effet dans le pays d'origine est justifié. [...] La discussion sur le caractère obligatoire ou facultatif (pouvoir discrétionnaire du juge de l'exequatur) de la reconnaissance et de l'exécution de la sentence arbitrale annulée est sans pertinence [...] La Cour retient que l'application rétroactive d'une loi dans une matière non pénale ne heurte pas forcément l'ordre public ou les droits de l'homme [...] De toute manière, il n'est pas établie que la Cour mexicaine ait procédé à l'application rétroactive d'une nouvelle disposition légale. [...] La Cour retient qu'une décision de justice qui rejette les prétentions d'une partie ou qui, rendue pour des motifs de compétence ou de procédure, a pour conséquence de priver d'effet une décision ayant admis les prétentions de la partie, intervient à un moment où d'autres voies pour obtenir la reconnaissance des prétentions de la partie ne sont pas ouvertes, ne heurte pas l'ordre public" (decisión de 27 de abril de 2017, *Pemex Exploración y Producción (México) v. Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral, S. de R.L. de C.V. (México)*, N° 59/17 - VIII 40105),

#### Gold Reserve (2015)

En el marco del Reglamento del Mecanismo Suplementario del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIRDI/ ICSID) -ICSID Additional Facility Rules-, el 22 de septiembre

de 2014 se dictó en París un laudo que fue recurrido en anulación ante la Cour d'Appel.

El laudo fue reconocido en Luxemburgo por decisión de 28 de octubre de 2014 del Presidente del Tribunal d'arrondissement de Luxemburgo, decisión que fue recurrida. La Cour d'Appel de Luxemburgo decidió suspender su decisión sobre el reconocimiento en vista de la pendencia del recurso de anulación ante la Cour d'Appel de París (decisión de 25 de junio de 2015 Huitième Chambre, affaire 42067 *République Bolivarienne du Venezuela v Gold Reserve Inc [Canada]*, no publicada pero citada en la decisión -más arriba referida- de la Cour d'Appel de Luxemburgo de 27 de abril de 2017, *Pemex Exploración y Producción (Mexique) v. Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral, S. de R.L. de C.V., COMMISA (Mexique)*, N° 59/17, VIII 40105).

En cambio, en los Estados Unidos, pendiente de resolver el recurso de anulación, el reconocimiento del laudo fue concedido por el US District Court para el Distrito de Columbia, que desestimó la pretensión contraria de suspender la decisión hasta que resolviera la Cour d'Appel, considerando que "[s]ince the award was made in France and enforcement is sought in the United States, both of which are signatories to the New York Convention, the confirmation is governed by the Convention. The New York Convention, moreover, has been codified via the Federal Arbitration Act [FAA], 9 U.S.C. [...] Consistent with the emphatic federal policy in favor of arbitral dispute resolution recognized by the Supreme Court, the FAA affords the district court little discretion in refusing or deferring enforcement of foreign arbitral awards. [...] A further constraint is that courts may refuse to enforce the award [brought under the New York Convention] only on the grounds explicitly set forth in Article V of the Convention. [...] Because the New York Convention provides only several narrow circumstances when a court may deny confirmation of an arbitral award, confirmation proceedings are generally summary in nature. The party resisting confirmation -in this case, Venezuela- bears the heavy burden of establishing that one of the grounds for denying confirmation in Article V applies. The showing required to avoid summary confirmation is high. [...] Under the New York Convention, it is true that district courts have discretion to stay proceedings where a parallel proceeding is ongoing in the originating country and there is a possibility that the award will be set aside. [But] a stay of confirmation should not be lightly granted [...] courts should consider in evaluating a request for a stay of proceedings [...] (1) the general objectives of arbitration -the expeditious resolution of disputes and the avoidance of protracted and expensive litigation; (2) the status of the foreign proceedings and the estimated time for those proceedings to be resolved; [...] The BIT [Bilateral Investment Treaty], ICSID Additional Facility Rules, and New York Convention all require immediate satisfaction of arbitral awards. [...] [T]he status of the foreign proceedings and the estimated time for their resolution also weighs in favor of Gold Reserve. While the Paris Court of Appeal is currently considering Venezuela's petition to set aside the Award, that appeal is not likely to be resolved soon [...] [M]oreover, the judgment rendered by the Paris Court of Appeal can be further appealed to the French

Supreme Court [...] As no final resolution appears imminent, the Court finds this factor also weighs in favor of Gold Reserve. [...] [Venezuela] also asserts that confirming the Tribunal's award would be contrary to the public policy of the United States. The New York Convention Article V(2)(b) permits a court to deny enforcement of an arbitration award if it 'would be contrary to the public policy of that country' in which enforcement is sought. [...] The New York Convention's public-policy defense to the confirmation of an arbitration award is construed narrowly, as courts recognize the presumption that favors upholding international arbitration awards under the Convention. Instead, denial is proper only when confirmation would violate the forum state's most basic notions of morality and justice" (decisión de 20 de noviembre de 2015, *Gold Reserve Inc (Canada) v. Bolivarian Republic of Venezuela*, civil action 1:14-cv-02014 JEB),

El 7 de febrero de 2017 la Cour d'Appel de Paris desestimó el recurso de anulación (Pôle 1, Chambre 1, *Republique Bolivarienne du Venezuela v Société Gold Reserve Inc [Canada]*, RG n° 14/21103).

#### Getma (2017)

Un laudo dictado el 29 de abril de 2014 en el marco de la Cour de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de la OHADA fue anulado por la Common Court of Justice and Arbitration (CCJA) en ejercicio de sus competencias institucionales de control de esos laudos. El US District Court for the District of Columbia denegó el reconocimiento del laudo (decisión 9 de junio de 2016, *In re Arbitration of Certain Controversies Between Getma Int'l (France) & Republic of Guinea*, 191 F. Supp. 3d 43, 55, D.D.C. 2016) y la Court of Appeals for the District of Columbia Circuit confirmó ese criterio considerando que "[u]nder the New York Convention, a district court may refuse to enforce a foreign award if a competent authority has set it aside under the law of the country in which the award was made. The district court refused to enforce the annulled award on that ground [....] For reasons of international comity we have declined to second-guess a competent authority's annulment of an arbitral award absent extraordinary circumstances. The standard is high and infrequently met, such that we cannot enforce an annulled award on a mere showing that the annulment is erroneous [...] For us to intervene in this foreign dispute, we would need to find the CCJA's annulment of the award to be repugnant to the United States's most fundamental notions of morality and justice [...] We will enforce an annulled award only if the annulment is repugnant to fundamental notions of what is decent and just in the United States. Getma's arguments under that standard are unpersuasive. The district court held that Getma failed to satisfy that stringent standard, and we agree" (decisión de 7 de julio de 2017, *Getma International (France) Republic of Guinea*, No. 16-7087).

#### Hardy (2018)

A pesar de la sucesiva y positiva reconducción por los tribunales de India de sus competencias exorbitantes en orden a la anulación del laudo extranjero, y aunque la High Court de Delhi consideró que no

tenía jurisdicción para conocer de la anulación de un laudo dictado en Kuala Lumpur (Malasia) el 2 de febrero de 2013 como consecuencia de un acuerdo de arbitraje anterior a 6 de septiembre de 2012, el Tribunal Supremo de India revocó aquella decisión declarando en cambio la competencia de los tribunales indios en orden a la anulación del laudo, separando los conceptos de 'venue' y 'seat' (o 'place') del arbitraje y considerando que "there was no chosen seat [of the arbitration outside of India] notwithstanding the choice of Kuala Lumpur as the venue for the arbitral proceedings" (decisión de 17 de octubre de 2018, *Union of India v. Hardy Exploration and Production (India) Inc.*, civil appeal n° 468 9f 2018).

#### CIMSA (2019)

Dos laudos dictados en La Paz (Bolivia) en el marco de la Comisión Inter-Americana de Arbitraje Comercial (IACAC, en su acrónimo inglés), de 13 de septiembre de 2013 ('the Merits award') y 10 de abril de 2015 ('the Damages award') fueron recurridos de nulidad en Bolivia. Tras haber sido anulado el primero de los laudos después de muy procelosas vicisitudes procesales en la jurisdicción boliviana, y estando pendiente el recurso contra el segundo laudo, se solicitó el reconocimiento de ambos laudos en los Estados Unidos, que concedió el US District Court for the District of Colorado considerando que "[w]hen a party to a foreign arbitration moves to confirm an award under the New York Convention, the district court must confirm the award unless it finds one of the grounds for refusal or deferral of recognition or enforcement of the award specified in the Convention. The seven exclusive grounds upon which the courts may refuse to confirm an award are specified in Article V of the New York Convention. Courts construe these defenses narrowly, to encourage the recognition and enforcement of commercial arbitration agreements in international contracts. The party opposing enforcement of the arbitral award has the burden of proving that one of the defenses applies. This burden is a heavy one, as the showing required to avoid summary confirmation is high. As relevant here, Article 5(1)(e) [of the New York Convention] provides that a court may refuse to enforce an arbitral award if the award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made. [...] Respondents assert that the Merits Award has been lawfully set aside by a competent authority in Bolivia, and they argue that the judicial corruption alleged by CIMSA does not warrant ignoring the decisions of the courts of the primary jurisdiction. [...] Respondents do not dispute that the Damages Award has not yet been set aside, but they argue that the Damages Award is not binding under Bolivian law' ".

Después de un cuidadoso análisis de las procelosas vicisitudes procesales en la jurisdicción boliviana por las que atravesó la anulación del 'Merits award', el District Court concluyó en que "the Merits Award has not been set aside by a competent authority in Bolivia". Y en cuanto al 'Damages award' consideró que "[t]he New York Convention does not define 'binding on the parties' but it would be contrary to the Convention's intent to conclude that 'binding' means the award must be enforceable in the country where the

arbitration took place. One of the main goals of the New York Convention was to facilitate the enforcement of arbitration awards by enabling parties to enforce them in third countries without first having to obtain either confirmation of such awards or leave to enforce them from a court in the country of the arbitral situs. To that end, the New York Convention purposefully eradicate[ed] the requirement that a court in the rendering state recognize an award before it could be taken and enforced abroad. Furthermore, U.S. courts have held that an arbitration award becomes binding when no further recourse may be had to another arbitral tribunal (that is, an appeals tribunal). [...] The parties' 2005 Agreement states: 'Any awards or orders issued by the Arbitral Tribunal shall be final and binding on the Parties to the Arbitration, who hereby expressly waive all motions to vacate, defenses and appeals against said award. The arbitral award may be enforced in any court having competent jurisdiction over same or over the Parties to the Arbitration or their assets'. The IACAC Rules to which the parties submitted similarly provide: 'The award shall be made in writing and shall be final and binding on the parties and subject to no appeal. The parties undertake to carry out the award without delay'. Therefore, I find that [the award] is binding under the New York Convention because the arbitration has concluded, a final award has been issued, and there are no further proceedings within the arbitral process" (decisión de 25 de marzo de 2019, *Compañía de Inversiones Mercantiles, S.A. CIMSA (Bolivia) v Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. (Mexico) and GCC Latinoamericana, S.A. de C.V. (Bolivia)*, Civil action No. 1:15-cv-02120-JLK).

#### Consideraciones finales

La retrospectiva que hemos querido presentar de los razonamientos sobre los que tribunales de distintas jurisdicciones han hecho seguir el reconocimiento del laudo anulado permiten apreciar los diferentes caminos por los que han venido a discurrir las cosas, la existencia de decisiones contradictorias y la litigiosidad que genera el laudo anulado.

Sin embargo, no debe perderse de vista que esas decisiones judiciales constituyen contadas excepciones a la regla general, aceptada en casi todas las jurisdicciones, de que el laudo anulado no debe ser reconocido: todas las jurisdicciones (incluso la francesa en su momento -*Clair*-) han interpretado el art. VI(e) del Convenio de Nueva York en el sentido de que el laudo anulado no debe ser reconocido, regla general que encuentra su mejor fundamento en la sencillez y previsibilidad de las soluciones y que doctrinalmente se construye y fundamenta sobre el principio *ex nihilo nihil fit* (el laudo deja de existir como tal desde que es anulado por autoridad competente, y así, en donde nada existe, nada es posible encontrar o reconocer) y sobre la distinción entre jurisdicción primaria (la de la sede del arbitraje) y jurisdicciones secundarias (las de reconocimiento y ejecución del laudo), de modo que, en las conocidas palabras de Reisman, "if the buck does not stop at the primary jurisdiction, it may not stop anywhere".

Pero aunque los trabajos preparatorios del Convenio de Nueva York no permitan desde luego interpretarlo en el sentido de que autoriza el reconocimiento del laudo anulado, y aunque la voluntad de los redactores del Convenio fuere efectivamente negar el reconocimiento al laudo anulado, la sencillez, previsibilidad y armonización de soluciones que había de asegurar el Convenio -dejando aparte siempre el efecto distorsionador que pudiere introducirse por la vía de su artículo VII-, habría de pasar necesariamente por que los tribunales interpretaran y aplicaran el artículo V(1)(e) en el sentido de que indefectiblemente impide el reconocimiento del laudo anulado (por autoridad competente), sin excepciones.

Lo cierto es sin embargo que distintas jurisdicciones han hecho notar que la regla general de no reconocimiento del laudo anulado no constituye una regla absoluta que imponga, en todo caso y bajo cualquier circunstancia, la denegación de su reconocimiento, sin más que atender al solo hecho de que el laudo ha sido anulado, es decir, 'irrespective of the procedures or integrity of the annulment proceedings' u otras circunstancias. Y ello con razón; porque si hubiera de ser así, de la desestimación del recurso contra el laudo habría de seguirse necesariamente su reconocimiento, lo cual es algo que evidentemente el Convenio de Nueva York no establece; y tan es así que el Tribunal Supremo español denegó el reconocimiento de un laudo por inexistencia de convenio arbitral, a pesar de que la Cour d'Appel de París había desestimado la anulación de ese laudo por ese mismo motivo, considerando el tribunal español que "la sentencia a la que venimos de hacer alusión, dictada el 30 de marzo de 1.990 por el Tribunal de Apelación de París, Francia, no ha sido reconocida por la jurisdicción española y ni siquiera se ha pedido su exequatur en España, como tampoco ha sido probado debidamente por el peticionario el derecho extranjero (el francés) regulador de la validez del pretendido acuerdo arbitral" (auto de 16 de abril de 1996 [Cendoj 28079110011996200355]).

Contrariamente a un imperativo incondicional de no reconocimiento del laudo anulado, supuestamente establecido en el Convenio de Nueva York, parece razonable -y aun obligado- aceptar que las circunstancias de la anulación pueden permitir -obligar- a excepcionar la regla general de no reconocimiento. Excepciones a la regla general de no reconocimiento que parecen además perfectamente consistentes con el propio Convenio: si el objeto y finalidad del Convenio de Nueva York es facilitar el reconocimiento de los laudos, el Convenio debe ser interpretado a la luz de ese objetivo (ex art. 31-1 de la Convención de Viena de 23 de mayo de 1969 sobre el derecho de los tratados) en el sentido de que establece el máximo nivel de control que los tribunales de los Estados contratantes pueden ejercer en orden al reconocimiento y ejecución de los laudos. A partir de ahí, parece que debe entenderse que el Convenio de Nueva York no tiene más contenido que el de obligar al reconocimiento cuando se dan ciertas condiciones, pero sin imponer el no reconocimiento si esas condiciones no se dan; y hacer seguir de ahí que el término "may", que emplea el artículo V(1) del Convenio en su texto inglés -como el "podrá" del texto español-, debe entenderse como 'criterio auténtico' del Convenio (en perjuicio del aparente imperativo contrario del texto francés -"ne seront refusés que"- que quedaría relegado en

aplicación del artículo 33-3 de la Convención de Viena), para concluir así en que el Convenio de Nueva York no impone ineludiblemente el no reconocimiento del laudo anulado, sea porque remite a la discrecionalidad del juez del reconocimiento ("may"), sea porque permite la aplicación de un régimen más favorable -ex artículo VII-, sea porque no puede excluir la aplicación del orden público del país del reconocimiento (entendido ese orden público como el sistema de valores fundamentales que inspira ese ordenamiento jurídico -su 'bloque constitucional'- y que, en cuanto tal, es, para ese ordenamiento jurídico, absolutamente obligatorio e inderogable), cuya función negativa o excluyente es, precisamente, impedir que puedan integrarse en ese ordenamiento -y por tanto, que puedan tener eficacia jurídica en ese ordenamiento- normas, decisiones o sentencias extranjeras que se juzguen incompatibles (orden público de evicción).

Es cierto que de ese modo queda a la postre entregado al criterio de la sede de ejecución el reconocimiento del laudo anulado; pero, a pesar de todo, la armonía de soluciones que persigue el Convenio de Nueva York no resultará gravemente ofendida en la medida en que, por regla general se deniegue el reconocimiento al laudo anulado y que solo excepcionalmente, en presencia de circunstancias significativas y relevantes, se excepcione la regla general de no reconocimiento, como hasta ahora se ha venido haciendo. Dejando aparte el criterio de la jurisprudencia francesa, que resulta de la aplicación de un régimen más favorable -que el Convenio autoriza-, éste es el estado de la cuestión en el Convenio de Nueva York: regla general de no reconocimiento del laudo anulado, con posibles excepciones.

Y seguramente no puede ni debe ser de otro modo. Por más que China haya manifestado expresamente (Notice of the Supreme People's Court on Implementing the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign arbitral Awards Acceded to by China, 10 april 1987, Fa[Jing]fa (1987) N°. 5 of the Supreme People's Court, pursuant to the decision adopted at the 18th session of the Standing Committee of the Sixth National People's Congress on December 2, 1986)<sup>7</sup> que la anulación del laudo será para sus tribunales imperativo determinante de la denegación del reconocimiento, está por ver si efectivamente se denegaría en China el reconocimiento en caso de que la anulación del laudo repugnara conceptos fundamentales y básicos de la organización política de la República China. En realidad, el reconocimiento del laudo anulado como excepción a la regla de no reconocimiento, no solo responde a exigencias de justicia que no pueden ignorarse, sino que, bien mirado, no tiene tampoco nada de verdaderamente inaceptable desde el momento en que el reconocimiento del laudo anulado es una posibilidad expresamente admitida por el Convenio de Ginebra y por el propio Convenio de Nueva York siquiera en cuanto éste permite la aplicación de un régimen más favorable y no puede desconocer la aplicación del orden público normativo del foro del reconocimiento. Parece pues que el reconocimiento del laudo anulado no resulta de una insuficiencia o indebida interpretación y aplicación del Convenio de Nueva York sino que es consecuencia de que dos jurisdicciones distintas (la de anulación y la de reconocimiento, la del arbitraje y

---

<sup>7</sup> <http://cicc.court.gov.cn/html/1/219/208/210/1144.html> (consultada en septiembre 2019)

la de ejecución) son llamadas a juzgar sobre un mismo laudo y unas mismas -o esencialmente las mismas- causales de anulación y no reconocimiento; de modo que, si se pretende que el reconocimiento del laudo anulado debe erradicarse del sistema, la solución ha de pasar necesariamente por eliminar unos de esos dos juicios o independizar uno del otro.

La vía adoptada por el Convenio de Ginebra y por el conocido 'Miami Draft' de van den Berg (Hypothetical Draft Convention on the International Enforcement of Arbitration Agreements and Awards, presentado en el congreso de ICCA en Dublin en 2008), limitando -reduciendo- las causales de anulación del laudo determinantes del no reconocimiento, disminuye las posibilidades de reconocimiento de laudo anulado, pero no las elimina por completo.

En una línea de atribución de competencias exclusivas de control del laudo, y eliminación de ulteriores controles de reconocimiento, están las soluciones que, desde las inicialmente propuestas por Holtzmann y Schwebel, siguen un 'modelo ICSID': atribuir competencia exclusiva de control y anulación del laudo internacional a un tribunal internacional *ad hoc* independiente (seguramente permanente y de jueces profesionales) con arreglo a unas determinadas causales internacionales de control. A partir de ahí la ejecución del laudo no anulado sería automática (sin necesidad de reconocimiento) en todos los Estados. Esa solución, que a nivel mundial parece un desideratum, en el ámbito de la Unión Europea parece posible y aun probable; y no tan lejana. A partir de la posibilidad que reconoce el artículo VII del Convenio de Nueva York se ha propuesto facilitar la ejecución en la Unión Europea (UE) de los laudos dictados en los Estados miembros, atribuyendo al tribunal de la sede del arbitraje competencia exclusiva para el control del laudo, de modo que, a partir de ahí, el laudo podría ejecutarse en cualquier Estado de la UE sin controles adicionales de reconocimiento. Así resulta, por ejemplo, del Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States, "Heidelberger Report" (Study JLS/C4/2005/03, final version september 2007)<sup>8</sup>: "The civil courts of the Member States where the arbitral award was given should be exclusively competent for recognising the award. Their decision on the enforceability of the arbitral award should be binding and, thus, be recognised in other Member States without any additional formality").

La otra solución pasa por eliminar el recurso de anulación del laudo, o independizarlo del control de reconocimiento, y trasladar el énfasis sobre la eficacia del laudo desde la sede del arbitraje a la sede de reconocimiento. Nótese que la incidencia de la anulación del laudo sobre su reconocimiento recuerda de alguna manera la antigua exigencia de declaración de ejecutividad del laudo en el país de origen, como requisito de su reconocimiento, que el Convenio de Nueva York quiso precisamente eliminar. Un cierto resabio de aquello podría verse en la incidencia que en el Convenio tiene la anulación del laudo sobre la denegación de su reconocimiento, porque si bien el reconocimiento no pasa ya por aquella previa declaración de ejecutividad, parecería que ahora quisiera hacerse pasar

---

<sup>8</sup> [http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study\\_application\\_brussels\\_1\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_application_brussels_1_en.pdf)

necesariamente por la inexistencia de una declaración de no ejecutividad (inexistencia de anulación).

Bélgica suprimió el recurso de anulación contra el laudo (Ley de 27 de marzo de 1985, introduciendo un cuarto párrafo al artículo 1717 del Code Judiciaire), salvo en caso de que una de las partes del arbitraje fuere una persona física o jurídica de nacionalidad, o con residencia o domicilio, sucursal o establecimiento en Bélgica, es decir, frente a "des sentences arbitrales qui ne concernent en rien notre pays", manteniendo el recurso si los "intérêt belges son concernés d'une manière ou l'autre" (Doc. Parl., Sénat, session 1982-1983, 513, n° 1, pp. 1 y 2). Otros países, sin llegar a tanto, permiten la renuncia al recurso de anulación (así, Suiza -Ley Federal de 18 de diciembre de 1987 sobre el derecho internacional privado, artículo 192, al. 1-, Túnez -Code de l'arbitrage, artículo 78(6)-, Bélgica -Code judiciaire, artículo 1717 en la redacción dada por la Ley de 19 de mayo de 1998-, Francia -Code de procedure civile artículo 1522-, Suecia -Ley de arbitraje, artículo 51-, Perú -Ley general sobre el arbitraje de 3 de enero de 1996, artículo 126-, Panamá -Decreto-Ley n° 5 de 8 de julio de 1999, artículo 36-). Lo cierto es, sin embargo, que la supresión del recurso de anulación del laudo no ha tenido ningún seguimiento. Incluso Bélgica dejó sin efecto ese régimen, mediante Ley de 19 de mayo de 1998; y la experiencia enseña que no es nada frecuente el pacto de renuncia al recurso contra el laudo.

En esta misma línea de actuación sobre el recurso de anulación, pero desde perspectiva otra que su eliminación o renuncia, es la de desvincular sus efectos del reconocimiento del laudo o ignorar la anulación del laudo en orden a su reconocimiento -criterio de la legislación y jurisprudencia francesa-, que es tanto como circunscribir los efectos de la anulación del laudo a la ejecución del laudo en la sede de anulación, y remitir cualquier otro control del laudo a las otras eventuales jurisdicciones de ejecución, reduciendo así la sede del arbitraje a las funciones de apoyo.

Sea como fuere, lo expuesto a lo largo de estas páginas permite concluir que el Convenio de Nueva York, lejos de hacer agua en cuanto no ha conseguido impedir el reconocimiento del laudo anulado, ha servido y continúa sirviendo satisfactoriamente a su objetivo y finalidad porque el reconocimiento del laudo anulado es ciertamente excepcional. Las razones manifestadas por las distintas jurisdicciones para reconocer excepcionalmente el laudo anulado no constituyen 'fanciful interpretations' -como se ha dicho- del Convenio, sino que son expresión de la inevitable necesidad de ponderar la concurrencia, en el caso concreto, de circunstancias que de ninguna manera pueden ser ignoradas y que obligan a moderar el pretendidamente mejor criterio de que, en aras a la sencillez y previsibilidad de resultados, el Convenio de Nueva York impone el no reconocimiento del laudo anulado sin atender a ninguna otra consideración.

Seguramente esta conclusión tiene que ser matizada en cuanto al sistema francés, construido sobre la ingeniosa construcción de un orden jurídico arbitral 'autónomo', en el que la anulación del laudo

nada interesa en cuanto tal a su reconocimiento; criterio tan denostado ('leads to inconsistent and bizarre results') como elogiado ('siempre nos quedará París'), pero cuya aplicación consiente, no obstante, el propio Convenio de Nueva York.

#### El estado de la cuestión en España

Escribiendo como escribimos desde aquí, concluimos con dos palabras sobre la situación de las cosas en España y unas muy breves consideraciones al respecto.

En España no ha sido reconocido ningún laudo anulado. La doctrina española en general ha venido considerando y considera, como es cierto, que existen buenas razones para considerar que la Ley española de Arbitraje (60/2003, de 23 de diciembre) no permite el reconocimiento del laudo anulado en aplicación del Convenio de Nueva York; tampoco existe un régimen de reconocimiento más favorable. Pero algunos autores están ya sosteniendo -como nosotros también- que, siendo aquella la regla general, es posible y aun obligado reconocer excepciones que, como en otras jurisdicciones, pueden permitir el reconocimiento del laudo anulado.

Desde luego, los tribunales españoles tienen bien asentado el entendimiento de que el Convenio de Nueva York obliga al juez a denegar el reconocimiento al laudo suspendido o anulado, sin ninguna otra disquisición, como -por ejemplo- cuando han establecido que "el art. V.1ºe) CNY contiene una causa de denegación del reconocimiento y de la declaración de ejecutoriedad del laudo extranjero consistente en que no sea aún obligatorio para las partes o haya sido anulado o suspendido por una autoridad competente del país en que, o conforme a cuya ley, haya sido dictada la sentencia arbitral" (auto de 20 de marzo de 2002 del Tribunal Supremo [JUR 2002,91480]); que "[l]a anulación del laudo arbitral sujeto al régimen del Convenio de Nueva York o, en el caso del Convenio europeo de arbitraje comercial internacional (CEACI), la anulación fundada exclusivamente en los motivos contemplados en el artículo IX.1 del CEACI, sí es causa de denegación del reconocimiento; [...] La anulación del laudo en el país de origen se contempla como causa de denegación del [reconocimiento del] laudo arbitral en el art. V pfo 1º.e) CNY" (auto de 11 de junio de 2007 del Juzgado de Primera Instancia de Rubí [JUR\2010\96143]); que "procede desestimar la petición de reconocimiento del laudo dado que el laudo cuyo exequátur se interesa ha sido objeto de un recurso de anulación ante las autoridades judiciales argentinas, siendo un hecho relevante y legalmente decisivo el que dichas autoridades hayan suspendido la eficacia del mencionado laudo en su propio Estado de origen" (auto de 6 de mayo de 2009 del Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Madrid, procedimiento 1689/2008, no publicado pero referido en autos de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de noviembre [Cendoj 28079370102009200269] y 22 de diciembre 2009 [Cendog 28079370102009800054] y confirmado por este último); que "[a]l amparo de este motivo [la falta de firmeza del laudo] se denegará el reconocimiento del laudo [al amparo del art. V.1e) CNY] por carecer de eficacia, bien por no haberla tenido o por ser privada [de ella] por resolución jurisdiccional (auto del 17 de noviembre de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

[VLEX-364688166]); que la "presunción de la regularidad y eficacia de la sentencia arbitral solamente cede cuando se pruebe la concurrencia de las causas tasadas que para la denegación del reconocimiento se establecen en la Convención [de Nueva York]" (auto de 10 de febrero de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana [VLEX-382624102]); que "el principio de reconocimiento de los laudos extranjeros, tal y como está concebido en el Convenio de Nueva York conlleva que, si en el país de origen se ha desestimado expresamente la suspensión de su fuerza ejecutiva como consecuencia de la acción de nulidad interpuesta contra el mismo, esa misma fuerza ejecutiva inmediata ha de ser respetada en el país de ejecución" (auto de 29 de julio de 2015 del Tribunal Superior de Andalucía [Cendog 18087310012015200073]); que "el Convenio [de Nueva York] sujeta la obtención del exequátur a la verificación del cumplimiento de los requisitos formales impuestos por el art. IV, al carácter arbitrable de la controversia (art. V.2 a), y al respeto al orden público (art. V.2 b ) que deben ser examinados de oficio-, desplazando hacia la oponente la prueba de los motivos de oposición que, de forma taxativa, establece el art. V.1 CNY" (auto de 28 de septiembre de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid [Cendog 28079310012016200059]); que "la citada cuestión presenta una vertiente de orden procesal cuya apreciación impediría el reconocimiento del Laudo, sin necesidad de entrar en el análisis de las causas concretas alegadas por la demandada, basada en el apartado e) del artículo V [del Convenio de Nueva York], -no ser la sentencia aún obligatoria o que ha sido anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que conforme a cuya ley ha sido dictada-" (autos de 14 de febrero de 2017 y 23 de enero de 2018 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid [Cendog 28079310012017200024 y 28079310012018200006]).

Así las cosas, parecería obligado entender que los tribunales españoles interpretan el Convenio de Nueva York en el sentido de que obliga a denegar el reconocimiento del laudo anulado o suspendido, (por más que el concepto de 'suspensión' del laudo no sea objeto de una interpretación autónoma -es decir, desde el propio Convenio- como una suspensión *ad hoc*, específica, *ex professo* o, dicho de otro modo, sin que baste el efecto suspensivo general que pueda llevar asociado *ex lege* el recurso contra el laudo; como tampoco el concepto de laudo 'obligatorio' es objeto de interpretación autónoma sino desde "el ordenamiento jurídico donde fue dictado el laudo" (auto TSJ MADrid de 14 de febrero de 2017 [Cendog 28079310012017200024]).

El laudo recurrido suele entenderse, en cambio, susceptible de reconocimiento haciendo aplicación del artículo V(1)(e) del Convenio a la luz de los artículos 9.6 y 45 de la Ley española de arbitraje, en un ejercicio, que se considera posible al amparo del artículo VII del propio Convenio, legitimador incluso de un *cherry picking* en favor del reconocimiento -que también ha sido aceptado por tribunales de otras jurisdicciones: *vid.* por ejemplo, las decisiones de 14 de marzo de 1984 del Tribunal Federal suizo (110 Ib 191, 194), 31 de julio de 1996 del US District Court for the District of Columbia (94-2339) y 23 de abril de 2004 del Oberlandesgericht de Colonia, Alemania (9 Sch 01-03)-, y al amparo también de un principio 'de

máxima eficacia' que el Tribunal Supremo español encuentra en el artículo VII del Convenio de Nueva York (afirmado como tal, por ejemplo, en sentencia de 14 de noviembre de 2007: "El reconocimiento de la existencia, validez y eficacia del acuerdo arbitral se halla, por lo demás afectado por el principio de máxima eficacia que se encuentra ínsito en la norma contenida en el artículo VII.1 del Convenio" [Cendoj: 28079110012007101161]).

Parecería incluso que algunas decisiones no excluyen un posible reconocimiento del laudo anulado en la medida en que afirman que el laudo anulado no puede ser reconocido '*en principio*' ("la razón que justifica la existencia de este precepto -art. V.1e) CNY-, muy relacionado con el art. VI CNY, es dar eficacia al laudo fuera del país en que se dictó, por lo cual, si hubiera sido anulado o suspendido en el país donde se dictó tampoco produciría, *en principio*, efectos fuera del mismo": autos del Tribunal Superior de Cataluña de 15 de mayo de 2014 [Cendoj 08019310012014200062] y 15 de febrero de 2016 [Cendoj 08019310012016200277]); y llegando otras hasta afirmar abiertamente la posibilidad de reconocimiento del laudo anulado: "Respecto a la cuestión relativa a la firmeza o no del laudo extranjero, debemos señalar la irrelevancia de tal cuestión a efectos de su homologación interna. Y ello porque el reconocimiento de un laudo extranjero no está en modo alguno condicionado a su firmeza, y tan solo podría denegarse (en lo que aquí interesa, ex artículo 5.1.e del Convenio de Nueva York): (1) si el laudo no fuera aun obligatorio para las partes; o (2) si hubiese sido anulado o suspendido por una autoridad competente del país en que se dictó. [...] Mientras éstas últimas [las sentencias judiciales] forman parte de un sistema jurisdiccional en el que la revisión por el órgano superior de la decisión del inferior en grado haría desaparecer del mundo jurídico la resolución así anulada o corregida (lo que impediría su reconocimiento por otro Estado), los laudos arbitrales son el resultado de una convención privada no vinculada con la jurisdicción del país en el que son dictados, con la consecuencia de que la eventual anulación de un laudo por los tribunales del lugar del arbitraje no afectaría necesariamente a su subsistencia jurídica a los meros efectos de su reconocimiento por un tercer Estado. [...] Como hemos dicho antes, y repetimos ahora, sólo se podrá (es una facultad) denegar el reconocimiento a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento (e) que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia": decisión de 12 de abril de 2019 del Tribunal Superior de Murcia [Cendoj 30030310032019200001].

Lo que no parece probable es que, atendidas las razones y consideraciones de sus colegas de otras jurisdicciones, los tribunales españoles vayan a denegar automáticamente el reconocimiento al laudo anulado, sin más que atender al hecho mismo de la anulación y sin entrar en ninguna otra consideración. Seguramente los tribunales españoles serán también sensibles, si se dá el caso, a introducir, en orden al reconocimiento del laudo anulado, consideraciones de justicia y discrecionalidad semejantes a las manejadas por otros tribunales, por ejemplo, en casos en que la

anulación del laudo responda a un "local standard annulment" que no se compadezca con un "international standard annulment", en línea de criterio con el artículo IX del Convenio de Ginebra; o, desde luego, en los casos en que la anulación del laudo sea consecuencia de la atribución de competencias judiciales extraterritoriales exorbitantes o distintas de las aceptadas por el Convenio de Nueva York para la anulación del laudo ('autoridad competente del lugar en que, o con arreglo a cuya ley de arbitraje, se haya dictado el laudo'); o, desde luego también, si la anulación del laudo resulta de un proceso sin garantías o en que se aprecie fraude o corrupción, o si, por alguna otra razón la anulación del laudo resulta contraria al orden público español. Lo que es tanto como proyectar sobre el reconocimiento el efecto excluyente del orden público ex. artículo 12.3 del Código civil, o hacer seguir el reconocimiento del laudo anulado de la denegación de reconocimiento de la decisión judicial de anulación, lo que, si bien es cierto que el Convenio de Nueva York no contempla, también lo es que tampoco obliga al juez del reconocimiento a reconocer automáticamente la sentencia extranjera de anulación.

Por tanto, hoy debería reconocerse en España el laudo Norsolor, a pesar de haber sido anulado en razón de haber aplicado los árbitros la *lex mercatoria*, desde el momento en que la Ley española de Arbitraje admite la aplicación de la *lex mercatoria* (art. 34). Posibilidad de reconocimiento del laudo anulado que, por otra parte, no tendría nada de extraordinario desde el momento, por ejemplo también, que el artículo 9.6 de la Ley española de Arbitraje establece que el convenio arbitral será válido "si cumple con los requisitos establecidos por las normas jurídicas elegidas por las partes para regir el convenio arbitral, o por las normas jurídicas aplicables al fondo de la controversia, o por el derecho español"; de lo que pudiera seguirse que un acuerdo de arbitraje juzgado inválido, y esa invalidez determinante de la anulación del laudo, podría ser no obstante considerado válido desde la ley española y, por consiguiente, el laudo anulado susceptible de reconocimiento en España.

.oOo.